

Molina, veinte de abril del dos mil veintiuno.

VISTOS Y OÍDOS:

El 5 de mayo de 2020, doña Valeria Faúndez Chamorro, en representación de la **INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE MOLINA** (en lo sucesivo, también, la ICT), RUT 61.502.000-1, domiciliada en Avenida Luis Cruz Martínez N° 1207, comuna de Molina, interpone denuncia en procedimiento de Tutela Laboral por práctica antisindical en contra de **EMPRESAS CAROZZI S.A.** (en adelante, también, “la Empresa” o “Carozzi”), RUT: 96.591.040-9, representada por don Mauro Jara Riquelme, ambos domiciliados en Camino La Costa N° 450, comuna de Sagrada Familia, por haber incurrido en grave vulneración a la libertad sindical en contra de la organización **SINDICATO N° 1 ESTABLECIMIENTO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EMPRESA CAROZZI PLANTA LONTUÉ** (en lo sucesivo también “el Sindicato” o “Sindicato N° 1”), por separación ilegal del trabajador aforado y presidente, don **PEDRO SEBASTIÁN RETAMAL FIGUEROA**, RUT: 15.127.333-5, en base a los artículos 174, 289 Letra F, 485, 292 inciso 3° y 4° y 389 inciso final del Código del Trabajo.

Fundamenta su denuncia en que el Sindicato N° 1 se encuentra legalmente constituido y tiene personalidad jurídica vigente. Que el señor Pedro Retamal interpone denuncia ante la ICT de Molina señalando que el 24 de marzo de 2020, luego de notificar a la empresa por escrito la constitución de directores electos, fue separado de sus funciones, invocando el empleador la causal del artículo 161 mismo código, gozando el trabajador de fuero laboral. El fiscalizador, don Esteban Flores Novoa, en compañía del abogado Alejandro Castro Poblete, se presentan en dependencias de la empresa denunciada y se entrevistan con don Mauro Jara Riquelme, Gerente de Producción de Carozzi Planta Lontué, quien afirma que se puso término al contrato del trabajador por necesidad de racionalizar los servicios en el área en que éste se desempeñaba. Así, se constata que el trabajador ha sido separado ilegalmente de su trabajo por tener fuero y, para los efectos de su reintegro, se requiere al empleador para que cese su conducta ilegal, ante lo cual no se allana.

Refiere que en instancia de Mediación de 30 de abril de 2020, realizada en forma remota, no se produjo acuerdo. Argumenta que existen indicios más que suficientes para considerar que la denunciada ha incurrido en actos que atentan gravemente contra la libertad sindical pues la conducta de la empresa implica privar de representatividad al sindicato y que éste pueda funcionar y desarrollarse con normalidad. Detalla como indicios los siguientes: 1.- Constitución del sindicato; 2.- Notificación a la empresa; 3.- Despido; 4.- Denuncia ante la inspección del Trabajo; 5.- Negativa contumaz de la empresa a reincorporar al trabajador aforado. Previa citas legales, jurisprudencia administrativa y desarrollo doctrinario sobre la materia, pide se declare: 1.- Que la empresa denunciada incurrió en actos constitutivos de práctica antisindical al atentar contra la libertad sindical, debiendo poner término a las mismas, con costas; 2.- Que se indique en la sentencia, las medidas concretas de reparación de la vulneración en que ha



incurrido la denunciada, solicitando el inmediato reintegro del dirigente a sus labores habituales; 3.- Que se condene a la denunciada al pago de la multa máxima establecida en el artículo 292 del Código del Trabajo o lo que VS., estime en justicia y 4.- costas.

El 11 de mayo de 2020, comparece don Roger Meléndez Riveros, abogado, domiciliado en Argomedo N° 115, Curicó, en representación del **SINDICATO N° 1 ESTABLECIMIENTO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EMPRESA CAROZZI PLANTA LONTUÉ**, domiciliado en Camino La Costa N° 450, comuna de Sagrada Familia y deduce demanda indemnizatoria en procedimiento de tutela de derechos fundamentales en contra de **EMPRESAS CAROZZI S.A.** Expone que tradicionalmente la sindicación ha sido mirada con recelo por los empleadores, en especial por la demandada, cuyas Plantas ubicadas en la provincia de Curicó ya habían presentado con anterioridad conductas contrarias a la libertad sindical; especifica que por hechos ocurridos en la planta de Teno, en causa Rit S-3-2018, la demandada fue condenada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, cuya sentencia se encuentra firme. Explica que el 20 de marzo de 2020 se constituyó el sindicato al que representa, eligiéndose como dirigentes sindicales a don Pedro Retamal Figueroa como presidente, a don Mauricio Villa Gálvez, en calidad de tesorero y a doña Margaret Botello Figueroa, como secretaria. El 24 de marzo del mismo año, Sr. Retamal le entregó una comunicación a don José Figueroa, Jefe de Distribución de la Planta, en que le informaba la constitución del sindicato y la nómina del directorio y, por ende, quienes gozaban de fuero. Luego de leer la carta, el Sr. Figueroa indicó que no la recepcionaría, restándole toda validez legal, calificando el acto de una “chuecura”, agregando que aprovechaba la oportunidad para informarle que se encontraba despedido por necesidades de la empresa y extenderle finiquito para que lo firmara, a lo cual éste se negó. Indica que a la Empresa no le importó que, en su calidad de dirigente sindical, el trabajador contaba con fuero laboral que impedía su despido.

Respecto al ánimo antisindical de la demandada, afirma que luego de la constitución del Sindicato, se comenzó a amenazar a los trabajadores con no entregar bonos ya acordados y se les indicó que habrían más despidos. Precisa que el 27 de marzo de 2020 se presentó una solicitud de fiscalización ante la Inspección Comunal del Trabajo de Molina, en abril de 2020 una denuncia administrativa por separación ilegal de funciones y luego una mediación que resultó frustrada, pues la Empresa se negó a reincorporar al trabajador. Añade que la estrategia de Carozzi consiste en mantener fuera de labores al presidente del Sindicato a objeto que, por la ausencia de remuneración, “asfixiarle” económicamente, cansarlo y forzarlo a desistir. Hacia los miembros de la directiva sindical y sus trabajadores afiliados, el mensaje va en la línea de imponer su poder económico por sobre los derechos sindicales y también desestimular y afectar al sindicato demandante, estimulando la formación de otro sindicato en la línea de la Empresa. Seguidamente, enumera los indicios de la vulneración: 1.- Actitud previa de la Empresa respecto a obstaculizar la formación de sindicatos; 2.- Sentencia ejecutoriada causa Rit S-3-2018; 3.- Despido del presidente del Sindicato, no obstante ser informado de la constitución de éste; 4.- Vulneración del fuero sindical; 5.- Negativa de reincorporación durante la fiscalización de la Inspección del Trabajo; 6.- Negativa de reincorporación durante la mediación; 7.- Investigación de la Inspección del Trabajo que concluye la existencia de indicios de vulneración de la libertad sindical; 8.- Ausencia de proporcionalidad entre el despido y la afectación a la libertad sindical; 9.- Todos los que se observen en el proceso. Previo desarrollo normativo y doctrinario sobre los derechos



fundamentales, la dignidad, el derecho a la libertad sindical, el fuero y la aplicación del principio de ponderación de derechos fundamentales, pide se declare: 1.- Que la denunciada ha vulnerado gravemente el Derecho Fundamental de la Libertad Sindical del Sindicato N° 1; 2.- Que la denunciada deberá ejecutar la totalidad de las medidas tendientes a cesar de inmediato las conductas vulneratorias de los derechos conculcados, bajo los apercibimientos legales y ejecutar las demás medidas que SS. estime pertinentes, destinadas a la reparación de la lesión causada; 3.- Que sin perjuicio de las demás medidas concretas que pueda adoptar el Tribunal destinadas a resarcir el daño causado, pide: a) Que la empresa deberá reintegrar al Presidente del Sindicato, efectuar charlas, entrega de cartillas informativas y/o publicaciones con el objeto de informar a sus trabajadores los derechos fundamentales que les asisten, en especial, los correspondientes a la libertad sindical; b) Que se ordena el pago al Presidente del Sindicato de la totalidad de las remuneraciones a que tuvo derecho durante el tiempo de separación. Adicionalmente, solicita se multe a la empresa con 150 UTM y c) Que la demandada pague al Sindicato a título de indemnización la suma de \$100.000.000 o lo que se estime conforme al mérito del proceso. 4.-Que las sumas que se ordene pagar se actualicen conforme al artículo 63 del C. del Trabajo; 5.- costas.

El 9 de junio de 2020, don Zarco Luksic Sandoval, abogado, en representación de **EMPRESAS CAROZZI S.A.**, contesta solicitando el rechazo de ambas acciones, con costas. Primeramente, niega los hechos contenidos en la denuncia y refiere el positivo contexto sindical de la Compañía. Indica que el despido del Sr. Pedro Retamal fue justificado pues existió una racionalización que hizo necesaria la desvinculación del referido trabajador y de otros tres dependientes, el 24 de marzo de 2020, quienes prestaban servicios de movilizadores y tenían como funciones principales preparar las cargas de productos para el despacho a clientes desde el Centro de Distribución. Como se describe en la carta de despido, la Empresa dispuso una disminución de dotación de movilizadores ante la menor operación de preparación de carga de productos alimenticios. Afirma que Carozzi no tuvo -ni ha tenido- conocimiento de la constitución del Sindicato ni de quienes conformaron su directiva sindical. Señala que don Pedro Retamal se negó a firmar la carta de despido presentada por Patricio Figueroa, Jefe del Centro de Distribución, afirmando ser el presidente de una organización sindical recién creada. Respecto a la comunicación entregada por el Sr. Retamal, aduce que ésta fue posterior al despido y no cumplía con las exigencias del artículo 225 del Código del Trabajo, por lo que resultaba imposible para la Empresa recibir la carta y entenderse legalmente notificada. Refiere que con posterioridad al despido del Sr. Retamal, la incertidumbre sobre la legalidad de la constitución del Sindicato de mantuvo, pues tampoco los integrantes de la directiva sindical se acercaron a la empresa para notificar su constitución. Precisa que el 2 de abril de 2020, se inicia por la ICT fiscalización remota con ocasión de constitución de sindicato y que decidió esperar a que le fueran notificadas las conclusiones, esto es, si el Sindicato se encontraba legalmente constituido o no, lo que desconoce a la fecha de contestación pues la ICT se negó a entregar dicho informe.

Sostiene que el 27 de abril del mismo año, se notifica a la empresa una nueva fiscalización por separación ilegal de trabajador, indicándose que el fuero del trabajador despedido es: "Trabajador despedido con anterioridad al acto de constitución del sindicato (artículo 221, inciso 3° del Código del Trabajo)", no expresándose en el formulario FI-20 ningún otro fuero que el Sr. Retamal tuviere en dicho momento. Así, de buena fe, Carozzi



supuso que la primitiva fiscalización no había finalizado y que el Sindicato no se encontraba legalmente constituido. Aduce que en la mediación remota, convocada por separación ilegal de trabajador con fuero de constitución de sindicato, la Empresa decide no reincorporar al Sr. Retamal porque: a) Desde su despido, habían transcurrido más de 30 días desde que se notificó a la Empresa la fiscalización en cuestión, por lo que resultaba inaplicable el artículo 221 inciso 3º del Código del Trabajo; b) las razones que motivaron la desvinculación fueron justificadas y c) La Empresa desconocía el resultado de la fiscalización iniciada el 2 de abril de 2020 sobre el cumplimiento de los requisitos legales de constitución de la organización sindical. Precisa que los argumentos esgrimidos en la fiscalización y posterior mediación, respecto del fuero que gozaba el Sr. Retamal, no fueron entregados a la Empresa en dichas instancias administrativas, es decir, que la Inspección del Trabajo jamás fiscalizó a la Compañía por el fuero de dirigente sindical que gozaba el Sr. Retamal y sólo conoció de aquello al momento de la solicitud de reincorporación del dirigente efectuada por el tribunal. Asegura que, de haber conocido dichos antecedentes, Carozzi habría obrado de modo distinto. Añade que el 12 de mayo de 2020, la Empresa envió correo electrónico a la ICT de Molina para conocer el estado de la fiscalización de 2 de abril de 2020, ante lo cual ésta respondió que no era de carácter público y que la empresa no dependía de su resultado o de ser informada de ella para dar cumplimiento a la normativa laboral vigente. Califica de sorprendente que la Empresa debiera asumir siempre la legalidad de la organización sindical y reclama que la actitud secretista y poco clara de la institución pública llevó a Carozzi a esta instancia judicial.

Alega la infracción al artículo 486 del Código del Trabajo, pues la empresa no fue fiscalizada por los hechos contenidos en la denuncia, que se refieren a la negativa de Empresa a reincorporar a un dirigente sindical aforado. Sin embargo, en la fiscalización de 27 de abril de 2020, se señala que el fuero del Sr. Retamal es por constitución del sindicato y no por su calidad de dirigente sindical. Añade que el informe de fiscalización no señala de forma alguna que se haya fiscalizado a la Empresa por el fuero de dirigente sindical, lo que afecta su derecho a defensa. Afirma que Carozzi ha actuado de buena fe y no ha incurrido en la práctica antisindical del artículo 289 letra f) del Código del Trabajo, pues la ICT no ha requerido a la Empresa respecto del reintegro del presidente del Sindicato. Alega, en subsidio, que la solicitud de reintegro del trabajador por fuero de constitución fue extemporánea. Esgrime que, de estimarse que hay una colisión de derechos, no hay afectación de la libertad sindical, toda vez que las conductas de Carozzi han sido razonables y proporcionales.

En lo referente a la contestación de la demanda, impugna la comparecencia del Sindicato como parte principal. Indica que la organización sindical alega la vulneración de la libertad sindical y no la separación ilegal de su dirigente sindical, que cuentan con ilícitos particulares. Argumenta que el libelo no cumple con el estándar exigido por el artículo 490 del Código del Trabajo, pues la única referencia que contiene la demanda respecto a la afectación de la libertad sindical es vaga. En subsidio, alega que Carozzi no ha vulnerado la libertad sindical del Sindicato, pues no puede afectar tal derecho si no ha sido notificado válidamente de su existencia. Agrega que en la demanda no existe ningún hecho en que se haga referencia al Sr. Mauricio Villa y la Sra. Margaret Botello, que el Sindicato no ha hecho entrega de la nómina de socios, que desde la reincorporación del Sr. Retamal se han entregado permisos sindicales y facilidades de reunión al Sindicato



Nº1 y que es irresponsable afirmar que la Empresa estimuló la formación de otro sindicato. Finalmente, estima improcedente el daño moral demandado y que el monto es desproporcionado, pues ya ha existido una reparación del daño causado, pues el Sr. Retamal ya fue reincorporado, le fueron pagadas sus remuneraciones y cotizaciones previsionales por el tiempo que estuvo separado de sus funciones y la empresa ha mantenido comunicación con la organización sindical.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en audiencia preparatoria celebrada el 16 de junio de 2020, llamadas a las partes a conciliación, ésta no se produjo, fijándose los siguientes hechos controvertidos: **1.-** Efectividad de que la empresa denunciada conocía la situación sindical del trabajador don Pedro Retamal Figueroa al momento de su despido; **2.-** Hechos y circunstancias que configuran los indicios de vulneración a la libertad sindical alegada y **3.-** Efectividad de que el actuar de la empresa denunciada ocasionó un perjuicio al Sindicato. Naturaleza y monto de dicho perjuicio.

SEGUNDO: Que para acreditar sus pretensiones, la parte denunciante ofreció la y rindió la siguiente prueba:

Documental:

- 1) Acta de Notificación Inicio de Procedimiento FI-1.
- 2) Informe de Fiscalización Nº 77.
- 3) Acta de Fiscalización separación ilegal de trabajador con fuero.
- 4) Informe de Fiscalización (exposición) 0706-2020-77, de 27 de abril de 2020.
- 5) Certificado Nº 1, de 20 de marzo de 2020.
- 6) Acta de mediación final de 30 de abril de 2020.
- 7) Constitución de Sindicato de 20 de marzo de 2020.
- 8) Carta de comunicación de constitución de Sindicato Nº 1.
- 9) Carta de aviso de término de contrato de 24 de marzo de 2020.

Testimonial:

- Declaró Marcelo Esteban Flores Novoa, fiscalizador de la ICT de Molina.

TERCERO: Que, por su parte, la demandante incorporó las siguientes probanzas:

Documental:

- 1) Acta de Constitución Sindicato de Establecimiento de Empresa de 20 de marzo de 2020, acompañada de documento "Solicitud de Ministro de Fe", con timbre de la ICT de Molina.
- 2) Estatuto del Sindicato Nº 1, con timbre de ingreso de la Oficina de partes de la ICT de Molina de 24.03.2020.
- 3) Certificado de vigencia Nº 706/2020/12 del Sindicato Nº 1, de 26.03.2020
- 4) Comunicación de constitución de Sindicato Nº 1, de 24.03.2020.



- 5) Carta de despido de Pedro Retamal Figueroa de 24.03.2020, acompañada de finiquito de 03.04.2020.
- 6) Formulario especial de solicitud de fiscalización de 27.03.2020, presentado por el Sindicato N° 1.
- 7) Denuncia administrativa de Sindicato N° 1 de 20.04.20 por separación ilegal de dirigente sindical.
- 8) Cadena de correos electrónicos de 03.04.2020.
- 9) Cadena de correos electrónicos, por el periodo del 11 al 12 de mayo de 2020.
- 10) Publicación "Prensaruil" de 25.04.2020, sobre denuncia de prácticas antisindicales a de la Empresa respecto del Sindicato N° 1.
- 11) Copia de informe de investigación por DD.FF N° 706/2020/77 de 27.04.2020.
- 12) Acta de Mediación final de 30.04.2020.
- 13) Constancia N° 07/06/2020/25 de Margaret Botello Figueroa, de 06.04.2020.
- 14) Set de captura de pantalla de WhatsApp y que comprende las capturas: a) información del contacto Patricio Figueroa; b) información del chat con contacto Patricio Figueroa; c) conversación con el contacto Patricio Figueroa, de 26.03.2020 y 2020/12.; e) documento adjunto en conversación, carta de 24.03.20 y f) documento adjunto en conversación, certificado N° 706/2020/12.

Exhibición de documentos:

- Respecto de la denunciada: Comunicación de constitución de sindicato de 24.03.2020.
- Respecto de la Inspección del Trabajo: Carpeta investigativa íntegra correspondiente a la fiscalización N° 0706/2020/77 y la totalidad de los antecedentes que digan relación con los hechos de la causa.

Confesional:

- Absolvió posiciones Cristián Kolubakin Muñoz, Gerente Corporativo de Personas Empresas Carozzi S.A.

Testimonial: Declararon:

- Esteban Marcelo Flores Novoa.
- Fredy Marcelo Gutiérrez Maureira.
- Christoffer Alberto Obando Corona.
- Marco Antonio Reyes Córdova.

Oficios:

- A la ICT de Molina, para los mismos fines solicitados en la exhibición de documentos y para que informe la totalidad de las gestiones realizadas ante la empresa denunciada ante la separación ilegal de dirigente sindical y en especial: a) los requerimientos que le efectuó; b) Los antecedentes documentales que se le exhibió y/o se puso en su conocimiento; c) Fecha en que don Pedro Retamal



informó a la empresa denunciada de la calidad de presidente del Sindicato y de su calidad de trabajador aforado y d) Actitud y/o respuesta de la empresa denunciada.

- A la Unidad de Mediación de la Dirección Regional del Trabajo de Talca, en particular a la mediadora Denisse Hernández Torres, a objeto de que informe: a) Objeto de la mediación de 30.04.2020; b) Tipo de fuero que le asistía al trabajador y si dicha calidad se informó al representante de la empresa denunciada y c) Actitud de la empresa denunciada.

Otros medios de prueba:

- 1) Se tuvo a la vista causa S-3-2018, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó.
- 2) Video de 24.03.2020, que graba momento de entrega de la carta por Pedro Retamal al Jefe de Planta, en la cual comunica la formación del Sindicato N° 1, de 12:48 minutos.
- 3) Video de 26.03.2020, que graba práctica antisindical por parte de la empresa, de exclusión de los trabajadores sindicalizados de la participación en reuniones de la misma, de 01:20 minutos.
- 4) Video de 26.03.2020, que graba reunión efectuada por la empresa en la cual informa a trabajadores que los autorizan a formar sindicato distinto al ya constituido, de 12:24 minutos.
- 5) Video que graba reunión efectuada entre los trabajadores, en la cual se trata el tema de la formación de un sindicato distinto al ya constituido, de 04:05 minutos.
- 6) Audio de reunión efectuada en la empresa, duración 33:07 minutos.
- 7) Audio de reunión efectuada en la empresa, duración 36:07 minutos.

CUARTO: La Empresa demandada incorporó las siguientes probanzas:

Documental:

- 1) Cartas de despido de Héctor Benítez, Matías Ferrada, Mauricio Aedo y Pedro Retamal, de fecha 24 de marzo de 2020.
- 2) Finiquitos de Héctor Benítez, Matías Ferrada, Mauricio Aedo y Pedro Retamal.
- 3) Carta de aviso del Sr. Pedro Retamal al Centro de Distribución de la Planta Carozzi, de 24 de marzo de 2020.
- 4) Correo electrónico de Esteban Flores Novoa a Berta Pinto Campos, con el asunto "Inicio de fiscalización por constitución de sindicato", de 2 de abril de 2020, que contiene los adjuntos: a) Notificación de inicio de procedimiento de fiscalización remota por parte de la ICT Molina y b) Requerimiento de documentación por constitución de sindicato.
- 5) Correo electrónico de Berta Pinto Campos a Esteban Flores Novoa con el asunto "RE: Inicio de fiscalización por constitución de sindicato", de fecha 7 de abril de 2020. Contiene los adjuntos: a) Notificación; b) Respuesta a requerimiento; c) Nómina de colaboradores y d) Antecedentes Anexo N° 4.
- 6) Notificación de Inicio de procedimiento de fiscalización por parte de Esteban Flores



Novoa de la ICT de Molina a Empresas Carozzi S.A., de 27 de abril de 2020.

- 7) Formulario de fiscalización separación ilegales de trabajador (es) con fuero, respecto de Pedro Retamal, de 27 de abril de 2020.
- 8) Acta de mediación en fiscalización N° 0706.2020.77, de 30 de abril de 2020
- 9) Manual de procedimiento de fiscalización de la Dirección del Trabajo, versión 2.0, de agosto de 2017.
- 10) Circular N° 028 que "Imparte materias específicas sobre procedimiento administrativo en caso de denuncia por vulneración de derechos fundamentales", de la Dirección del Trabajo, de 3 de abril de 2020.
- 11) Acta de notificación de requerimiento documentación y citación, relativa a la reincorporación de Pedro Retamal por orden judicial de 11 de mayo de 2020.
- 12) Correo electrónico de Valeria Faúndez a Berta Pinto con el asunto: RE: permiso, de 12 de mayo de 2020.
- 13) Liquidación de sueldo de Pedro Retamal de marzo y abril de 2020
- 14) Certificado de Banco de Chile por transferencia de dinero a Pedro Retamal, de 13 de mayo de 2020.
- 15) Certificados de pago de cotizaciones previsionales y de salud de Pedro Retamal, de marzo y abril de 2020.
- 16) Cadena de correos electrónicos de Pedro Retamal a Berta Pinto, de fechas 11 de mayo, a las 22:31 horas, 12 de mayo a las 11:44 y 12 de mayo a las 16:52.
- 17) Correo electrónico de Pedro Retamal para Berta Pinto Campos, con asunto "RE: Permiso", de 12 de mayo a las 22:54 horas.
- 18) Correo electrónico de Pedro Retamal para Berta Pinto, sin asunto, de 26 de mayo de 2020.
- 19) Cadena de correos electrónicos entre Pedro Retamal para Berta pinto, de 26 y 27 de mayo.
- 20) Cadena de correos electrónicos entre Pedro Retamal para Berta Pinto, de 2 de junio en distintos horarios.

Confesional:

- Absolvió posiciones Valeria Faúndez Chamorro, Inspectora Comunal del Trabajo de Molina.

Testimonial:

- Declaró Mauro Jara Riquelme, Gerente de Producción de la Planta Carozzi Lontué.

Exhibición de documentos:

- A la Inspección del Trabajo de Molina: a) Carpeta de fiscalización, con expediente que incluya la totalidad de los documentos, entrevistas, requerimientos de documentación, informe final y observaciones si existieren y notificaciones efectuadas tanto a la Empresa como al Sindicato de la fiscalización remota con ocasión de constitución de Sindicato, notificada el 2 de abril de 2020; b) Carpeta



de todas las denuncias efectuadas por el Sindicato N° , desde el 20 de marzo de 2020; c) Carpeta de todas las denuncias efectuadas por Pedro Retamal, desde el 20 de marzo de 2020; d) Acta de constitución del Sindicato; e) Documentos donde conste fecha de inscripción del Sindicato y e) Documento donde conste fecha de otorgamiento de la R.S.U del Sindicato.

QUINTO: Las partes acordaron como hechos pacíficos los siguientes: **1.-** Existencia de una relación laboral entre don Pedro Retamal Figueroa y Carozzi S.A.; **2.-** Que, con fecha 24 de marzo de 2020, dicho trabajador fue separado de sus funciones, invocando para estos efectos por el empleador la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa; **3.-** Con fecha 20 de marzo de 2020 se constituyó la organización sindical de estos autos; **4.-** Que don Pedro Retamal Figueroa fue elegido como presidente de dicho sindicato; **5.-** Que en instancias administrativas la denunciada se habría negado a reincorporar al trabajador a sus funciones y **5.-** Que, iniciada la presente causa, la denunciante dio cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal, en orden a reincorporar al trabajador ya individualizado, con fecha 11.05.2020.

SEXTO: En el caso de autos, el derecho fundamental que se alega como afectado, tanto por la denunciante y por la demandante, es la libertad sindical. Se reprocha el despido ilegal de un dirigente con fuero sindical, el presidente del Sindicato N° 1, situación que origina la conducta constitutiva de práctica antisindical del artículo 289 letra f) del Código del Trabajo, que dispone que “Serán consideradas prácticas antisindicales del empleador, las acciones que atenten contra la libertad sindical, entendiéndose por tales, entre otras, las siguientes... f) Negarse a reincorporar en sus funciones a un dirigente sindical aforado, frente a requerimiento de un fiscalizador de la Inspección del Trabajo...”, lo que habría ocurrido en dos oportunidades durante la instancia administrativa. Además, se expone que la demandada habría incurrido en otras acciones contrarias a la formación y funcionamiento del Sindicato N° 1, en concreto, amenazas a los trabajadores referentes a la pérdida de bonos ya acordados, a nuevos despidos y otras prácticas con el objetivo de desestimular al sindicato demandante.

SEPTIMO: La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Su regulación está contenida en el artículo 19 N° 19 de la Constitución Política de la República, en el Código del Trabajo y a nivel internacional en los Convenios N° 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo, que forman parte de nuestro derecho interno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 5° de la Carta Fundamental. En dichos estatutos se establecen los mecanismos de tutela y se busca evitar actos concretos que perturben su ejercicio. Se puede definir como el derecho que asiste a todos los trabajadores para constituir organizaciones, afiliarse o desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa, sin intervención de terceros y, específicamente, el derecho al ejercicio de la actividad sindical por medio de aquellas acciones tendientes a la defensa y promoción de los intereses que le son propios.

OCTAVO: En tanto, una práctica antisindical es toda acción u omisión que atente contra la libertad sindical. De acuerdo a sentencia Rol 92904-2016, dictada por la Excelentísima Corte Suprema, el 6 de abril de 2017, conociendo un recurso de unificación de jurisprudencia, sus elementos básicos son a) la verificación de una conducta de parte del sujeto activo; b) una unidad o pluralidad de acciones u omisiones y c) que se afecte la libertad sindical. En dicho fallo se establece que “no necesariamente es menester que se



concreto efectivamente la perturbación en el derecho a que se hace referencia, pues, en algunos casos, puede bastar que la acción u omisión sea inequívocamente atentatoria del mismo o que sus resultados sean sensatamente predecibles en ese sentido. Entonces, se debe inferir que no es necesario que se exija, menos que se pruebe, que el sujeto activo tuvo la intencionalidad o ánimo deliberado de violentar la libertad sindical, bastando que se acredite el supuesto que señala el artículo 289 inciso 1º del Código del Trabajo (...) la concurrencia objetiva de un hecho lesivo de la libertad sindical”. En la misma línea, el profesor César Toledo Corsi en su libro Tutela de la Libertad Sindical, explica que no se requiere una intencionalidad o elemento subjetivo en la conducta demandada para poder estar en presencia de una práctica antisindical, teoría a la que adhiere esta juzgadora y que supone una interpretación concordante con el procedimiento dispuesto para la sustanciación de la materia, cual es el de Tutela de Derechos Fundamentales y con la exégesis pro homine que exigen dichas garantías. Importante resulta señalar que la descripción de la figura típica contemplada en el artículo 289 lera f) del Código del Trabajo, invocada en el caso de marras, no contiene como requisito para su procedencia elemento subjetivo alguno, como sí lo contemplan otros numerales de dicha norma.

NOVENO: La demandada dedujo como excepción previa de fondo en su contestación que el Sindicato N° 1 debió comparecer como tercero coadyuvante y no como parte principal, alegación que debe ser necesariamente rechazada atendido que el artículo 486 del Código del Trabajo señala expresamente, en su inciso final que “(...) La organización sindical a la cual se encuentre afiliado el trabajador cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados, podrá interponer denuncia y actuará en tal caso como parte principal”, cuestión que ocurre en estos autos. Despejado ello, cabe decir que el Código del Trabajo, en el artículo 493, introdujo una reducción probatoria que consiste en la obligación del trabajador -o en este caso, el Sindicato-, de presentar sólo indicios suficientes de la vulneración o conducta antijurídica que alega, con lo cual se aligera o desplaza la posición probatoria del mismo, exigiéndole un principio de prueba por el cual se acrediten indicios de la conducta lesiva, es decir, se prueben hechos que generen la sospecha fundada y razonable de que ha existido esta lesión. El análisis de la existencia y acreditación de dichos indicios será efectuado en el desarrollo del segundo punto de prueba contenido en la sentencia.

DÉCIMO: En relación al primer hecho a probar, esto es, **si existía conocimiento previo de la situación sindical del Sr. Retamal por parte de la Empresa al momento de su despido**, es necesario analizar los hechos ocurridos en la reunión de 24 de marzo de 2020, oportunidad en que se concretó la desvinculación. En su escrito de contestación, Carozzi afirma que no tuvo conocimiento de la constitución del Sindicato N° 1 ni de quienes conformaron su directiva sindical y que “citado el Sr. Retamal, se le leyó la carta de despido, explicándole las causales del despido, indicándosele que desde ese momento se le ponía término al contrato de trabajo. Ante lo señalado por el Jefe de Distribución y, posterior a la concreción del despido, el Sr. Retamal se negó a firmar la carta de despido, afirmando ser el presidente de una organización sindical”. Contrariamente a lo alegado por la Empresa, ha logrado acreditarse con la prueba rendida, específicamente con video de 24 de marzo de 2020, que el despido de don Pedro Retamal se produjo con posterioridad a la comunicación verbal y escrita que éste hizo a don Patricio Figueroa de la constitución del Sindicato y de su calidad de presidente. De este modo, Carozzi se enteró en dicha reunión, en forma previa al despido, de la situación sindical de don Pedro



Retamal y, estando en conocimiento de ello, optó por desvincularlo, desvirtuándose así la tesis de la demandada. Cabe señalar que don Mauro Jara Riquelme, Gerente de Producción de la Planta Lontué de Carozzi, depuso en el juicio, en calidad de testigo, que: “Al momento del despido, Pedro hace mención a que pertenecería a una organización sindical, ante lo cual no había ningún documento que lo avalara respecto a esto, por tanto, se procedió al despido tal como estaba planificado”, declaración que es inconsistente con la prueba audiovisual rendida, que corrobora la existencia del documento que informa la constitución del Sindicato.

Alega también la demandada que la comunicación entregada por el Sr. Retamal, además de ser posterior al despido, no cumplía con lo establecido en el artículo 225 del Código del Trabajo, que dispone: “El directorio sindical comunicará por escrito a la administración de la empresa, la celebración de la asamblea de constitución y la nómina del directorio y quiénes dentro de él gozan de fuero, dentro de los tres días hábiles siguientes a su celebración”. A juicio de esta sentenciadora, los defectos que se alegan respecto a la notificación de la carta, no la hacen inoponible a la Empresa, pues el documento fue entregado por escrito, dentro de plazo legal y en él sí se señala en forma expresa el hecho de la constitución del Sindicato y el nombre y firma de su presidente electo, quien es evidentemente parte del directorio sindical y goza de fuero. Al respecto, debe tenerse como consideración principal que todo trabajador que concurre a la constitución de un sindicato, goza de manera inmediata o ipso facto de fuero sindical, pues así lo dispone el artículo 221 del Código del Trabajo, garantía que no se encuentra condicionada a la comunicación establecida en el artículo 225 del mismo texto. Asimismo, el incumplimiento de alguno de los requisitos contemplados en el artículo 225, tampoco condiciona el fuero del artículo 243 del Código del Trabajo, establecido a favor de los dirigentes sindicales desde la fecha de su elección, pues el citado artículo en ningún momento señala que la sanción ante ello es la pérdida del fuero sindical. En otras palabras, el trabajador goza de fuero desde su elección como dirigente sindical y no como resultado de la comunicación al empleador. Así, puede y debe concluirse que don Pedro Retamal gozaba del fuero establecido en el artículo 243 del Código del Trabajo desde la fecha de su elección como presidente del Sindicato N° 1, esto es, desde el 20 de marzo de 2020, día en que se celebró la asamblea de constitución de la referida agrupación, siendo dicha situación informada por el empleado a la Empresa, la que procedió, a pesar de ello, a concretar el cese de sus funciones.

DÉCIMO PRIMERO: En relación al desconocimiento alegado por la Empresa sobre la legalidad de la constitución del Sindicato y de la calidad de dirigente sindical del Sr. Retamal, situación que se habría mantenido con posterioridad a su desvinculación, la demandante incorporó audio de 36:07 minutos sobre una reunión convocada por Patricio Figueroa, luego del despido del Sr. Retamal, en la cual se dirige a los trabajadores de turno de la Planta para confirmar la existencia del Sindicato, la efectividad de ser el Sr. Retamal el presidente de la agrupación y saber quiénes pertenecían a ésta. Ante la ratificación de los empleados, señala: “Primero yo pensé que no era verdad (en referencia a la carta) pero ya fue ratificado, incluso lo vio directamente Cecilia Lacalle que es la Gerente Nacional de Recursos Humanos”, declaración que da cuenta que la Empresa, por medio del Sr. Figueroa, consultó y confirmó directamente con los trabajadores de la Planta la realidad de la organización sindical que se acababa de gestar, información que llegó a conocimiento de distintos niveles jerárquicos de la compañía, antecedente



probatorio que posee fuerza suficiente, por sí mismo, para desvirtuar la tesis de la demandada en cuanto al desconocimiento de la constitución de la organización sindical y de la calidad de dirigente del Sr. Retamal.

Adicionalmente, fue incorporado al proceso Certificado de vigencia N° 706/2020/14, de 26 de marzo de 2020, suscrito y timbrado por la Jefa de la División de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, en cuyo texto se lee que la organización sindical demandante se encuentra legalmente constituida, que tiene personalidad jurídica vigente y la composición de su directorio. Ha quedado acreditado con la prueba rendida, específicamente con el set de capturas de pantalla de conversación de WhatsApp entre don Patricio Figueroa y don Pedro Retamal, de 26 de marzo de dicho año, que tal certificado fue enviado por el trabajador al Sr. Figueroa dos días después de haber sido desvinculado, lo que da cuenta que éste sí recibió información adicional y oficial –pues dicho certificado emana de la Dirección del Trabajo– que confirmaba la constitución del sindicato y su directiva. En relación a lo que se viene señalando, consultado el absolvente don Cristian Colubakin, Gerente Corporativo de Personas de Carozzi, sobre si tuvo conocimiento del documento emitido por la Inspección del Trabajo que indicaba quiénes eran los dirigentes del Sindicato N° 1 (Certificado N° 706/2020/14), respondió “no sé cuál documento”. Ante la pregunta sobre si recibió en su WhatsApp un mensaje de don Pedro Retamal donde éste le informaba que era dirigente sindical, respondió “te podría mostrar mi teléfono, la cantidad de WhatsApp que me llegan. No sé, no lo puedo decir con certeza”. Asimismo, interrogado en audiencia de juicio sobre si sabe si doña Cecilia Lacalle, Sub Gerente de Relaciones Laborales de Carozzi, recibió un WhatsApp en que se informaba la calidad de presidente del Sr. Retamal, contestó: “No sé, no me meto en el WhatsApp de la gente que trabaja conmigo”, respuestas que refieren desconocer la situación de la organización sindical y su presidente, sin embargo, como ya se señaló, el video y audio ya referidos dan cuenta que la empresa sí tenía conocimiento de ello.

Apoya la conclusión anterior que el fiscalizador de la Inspección del Trabajo, don Esteban Flores Novoa, afirmó en calidad de testigo en el juicio que el Certificado N° 706/2020/14 le fue exhibido a la Sra. Berta Pinto, Jefa de Recursos Humanos de la Planta y al Sr. Mauro Jara el 27 de abril de 2020, oportunidad en que se requirió, en dependencias de la Empresa, el reintegro del trabajador a sus labores, a lo que ésta no se allanó; antecedente que se contrapone a lo alegado en la contestación y a lo indicado por don Mauro Jara en el juicio, respecto a que la empresa no recibió documento oficial alguno de la Inspección del Trabajo, pues, en sus palabras, el único documento oficial que recibió fue una orden para presentarse a una mediación.

DÉCIMO SEGUNDO: Para apoyar la tesis consistente en que la Empresa no fue informada de la legalidad de la constitución del Sindicato, ni del fuero de constitución de su presidente, Carozzi señala en su contestación que la ICT inició una fiscalización remota acerca del cumplimiento de los requisitos legales de constitución del Sindicato, el 2 de abril de 2020, por lo que se mantuvo en la incertidumbre sobre la legalidad de la formación de éste y no tuvo otra opción que esperar a que le fuera notificado el resultado de dicha investigación, esto es, si el Sindicato se encontraba legalmente constituido o no, lo que nunca ocurrió, pues el organismo técnico se negó a entregar las conclusiones de su informe. Para acreditar ello, incorporó como prueba correo electrónico enviado por don Esteban Flores a doña Berta Pinto, con el asunto “Inicio de fiscalización por constitución



de sindicato” que contiene los documentos adjuntos “Notificación de inicio de fiscalización de procedimiento de fiscalización remota” y “Requerimiento de documentación del Sr. Esteban Flores”, todos de 2 de abril de 2020, y correo electrónico de Berta Pinto a Esteban Flores, de fecha 7 de abril del mismo año, con cuatro archivos adjuntos, en el que Carozzi entrega la información requerida por el organismo fiscalizador, en concreto, la nómina de trabajadores, giro, actividades productivas y organigrama de la Empresa. Además acompañó como prueba correo electrónico de Valeria Faúndez, Inspectora Comunal del Trabajo de Molina, enviado a Berta Pinto, de 12 de mayo de 2020, que responde la consulta de la Empresa sobre el estado de la aludida fiscalización remota. En síntesis, la ICT comunica que la fiscalización no es de carácter público y por tanto el resultado de la misma no compromete la obligatoriedad de ser informada al ente fiscalizado. Agrega que en ningún caso la Empresa depende del resultado de la fiscalización o de ser informada por la institución para dar cumplimiento a la normativa laboral vigente. Repreguntado en audiencia de juicio el fiscalizador don Esteban Flores sobre si se fiscalizó el quórum del Sindicato y si se le notificó a la empresa la labor investigativa de la Inspección, éste explicó que, después que se constituye un sindicato, la unidad de relaciones laborales instruye una fiscalización investigativa sobre la cantidad de trabajadores que laboran en dicho lugar. Preciso que él hizo esa fiscalización, pero que en tal oportunidad no se notifica a la Empresa del Sindicato; se les dice que hay un Sindicato y que por eso se está fiscalizando, siendo la materia a investigar la cantidad de trabajadores que laboran en ese establecimiento en razón de la constitución del Sindicato. Repreguntado sobre si consta en los documentos entregados a la Empresa el nombre del Sindicato, contestó que no, explicando que el procedimiento de fiscalización se inicia con el Formulario I-1 (referido a la fiscalización de 27 de abril de 2020) y ahí se coloca el nombre de la empresa y quien atiende al fiscalizador, pero no se indica la materia a fiscalizar ni tampoco quienes son los dirigentes sindicales.

DÉCIMO TERCERO: En relación a este punto, en audiencia de juicio celebrada el 11 de marzo de 2021, la demandada solicitó al tribunal hacer efectivo el apercibimiento del artículo 453 número 5 del Código del Trabajo en relación al “Documento N° 75, Informe Complementario de Exposición”, acompañado por la ICT en cumplimiento de la diligencia de exhibición de documentos. Fundamentó su solicitud en que el documento es incompleto e inconexo, pero de gran importancia para la teoría del caso de su representada, porque acredita que se habría realizado por la ICT la investigación de 2 de abril de 2020 para determinar si el Sr. Pedro Retamal tenía o no fuero de constitución. Señala que la tesis sostenida por su parte es que nunca se le comunicó por la ICT que el Sr. Retamal tenía fuero de constitución y que ahora ésta confirma, a través de la carpeta investigativa, que se habría realizado dicha investigación, el 2 de abril de 2020, pero exhibiendo un documento descontextualizado, cuyas páginas no tienen correlación. Agrega que el Documento N° 75, al ser un informe complementario, depende de un documento principal que no se presentó al juicio, por lo que la prueba es ininteligible y nula. Por su parte, la inspección del Trabajo indicó que acompañó al proceso la totalidad de lo pedido y explicó la finalidad del cuestionado informe complementario, esgrimiendo que se realizó para ver el tipo de sindicato que se estaba constituyendo, si era de empresa o de centro de distribución, pero que no dice relación con las prácticas antisindicales denunciadas. El tribunal dejó el pronunciamiento sobre el apercibimiento solicitado para sentencia definitiva, lo que a continuación se realiza.



El artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo establece: “cuando, sin causa justificada, se omita la presentación de aquellos que legalmente deban obrar en poder de una de las partes, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba decretada”. En el caso concreto, la demandada pide que se tenga por probado que la empresa no fue informada sobre el fuero de constitución del Sr. Retamal. Lo primero que se puede señalar es que efectivamente el documento se encuentra incompleto, pues carece de la página dos y también de las páginas que siguen a la número tres. Sin embargo, dicha situación no impide comprender el contexto ni la finalidad de dicho informe. Así, del texto expreso del documento N° 75, se desprende que es un informe complementario solicitado por la Dirección del Trabajo del Maule en relación a la fiscalización investigativa que da cuenta de la constitución de Sindicato de Establecimiento, referida a los puntos productivos que posee la Planta Lontué de Carozzi. Se señala como materia fiscalizada: “Verificar la calidad de establecimiento para la constitución de sindicato de establecimiento”. Para resolver la solicitud incoada, el tribunal debe realizar además un análisis del documento de conformidad con toda la prueba rendida. En este sentido, el fiscalizador Sr. Esteban Flores, consultado sobre si tuvo que complementar el Informe relativo a la fiscalización remota que realizó sobre la constitución de sindicato, el 2 de abril de 2020, explicó que le pidieron aclarar la unidad productiva que tiene Carozzi en Lontué, lo que coincide plenamente con lo dispuesto en el Informe complementario de exposición N° 75.

Por otro lado, respecto a la supuesta existencia de un informe principal del cual depende el escrito impugnado, el cual no fue acompañado al proceso, se tiene presente que efectivamente no consta en autos un informe final sobre la fiscalización iniciada el 2 de abril de 2020, pero que doña Valeria Faúndez explicó en estrados que “la fiscalización de constitución dice relación con el tipo de sindicato y el quórum”, lo que fue ratificado por el Sr. Flores en su declaración, lo que permite concluir que dicha fiscalización no tenía como fin informar a la empresa sobre el fuero de constitución del Sr. Retamal, como asegura la demandada, pues tenía por objetivo verificar la calidad de establecimiento para la constitución del sindicato.

Si bien se intentó probar en el juicio que, mediante la fiscalización remota iniciada el 2 de abril de 2020, la ICT no informó a la Empresa sobre el nombre del Sindicato N° 1 ni tampoco el de su directiva (pues ello no consta en los documentos aportados, lo que justificaría la tesis del desconocimiento de la Empresa), ello no implica en ningún caso que dicha fiscalización debiera contener esos antecedentes o que su finalidad fuera la de informar a la Empresa sobre la constitución del Sindicato o del fuero de constitución del Sr. Retamal, pues, como ya se dijo, su finalidad era la de verificar la calidad de establecimiento para la constitución de sindicato y tampoco se puede concluir razonablemente que, por el hecho de que no se señale el nombre de Sindicato N° 1 en esos documentos, la compañía no se enteró de la constitución del Sindicato, pues de la prueba audiovisual rendida se desprende que el Sr. Retamal informó a la empresa el 24 de marzo de 2020 de la constitución del nuevo Sindicato, de forma verbal y escrita, lo que fue confirmado por los trabajadores de la Planta, al ser consultados a viva voz por el Sr. Figueroa en una reunión celebrada en dependencias de la Empresa, lo que da cuenta de claros indicios de la existencia del Sindicato N° 1 y del fuero sindical de su presidente. Asimismo, es preciso reiterar que nuestro legislador laboral contempla norma expresa respecto a la forma de notificación de la constitución de un sindicato, el artículo 225 del



Código del ramo, el cual en parte alguna exige que la Inspección del Trabajo sea quien notifique a la empresa de ello -o de la legalidad de ello- por lo que dicha alegación debe ser desestimada.

A mayor abundamiento, y como ya se indicó previamente, la norma que regula el fuero de constitución de un sindicato, artículo 221 inciso tercero del Código del Trabajo, señala: “Los trabajadores que concurren a la constitución de un sindicato de empresa o de establecimiento de empresa gozarán de fuero laboral desde los diez días anteriores a la celebración de la respectiva asamblea constitutiva y hasta treinta días de realizada. Este fuero no podrá exceder de cuarenta días”, lo que implica que, de modo inmediato, los trabajadores gozan de fuero de constitución, sin que sea procedente esperar por parte de la empresa tener confirmación escrita o expresa de dicha garantía por medio de un informe de la Inspección del Trabajo. Así las cosas, se concluye que no procede hacer efectivo el apercibimiento solicitado.

DÉCIMO CUARTO: Por otra parte, la demandada argumentó que el despido de don Pedro Retamal fue justificado, fundado en la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, en específico, a la necesidad de racionalizar los servicios en el área de preparación de carga de alimentos en la cual se desempeñaba el referido empleado y que afectó a otros tres dependientes de dicha área. Al respecto, aportó cuatro cartas de despido, de 24 de marzo de 2020; tres de ellas están suscritas por los trabajadores Matías Antonio Ferrada Barahona, Mauricio Andrés Aedo Mardones y Héctor Alejandro Benítez Herrera, mientras que la última, correspondiente al Sr. Pedro Retamal, no está suscrita. Los documentos son del mismo tenor y en ellos efectivamente se expone la causal de despido y los motivos de la racionalización del área de carga aludidos por la demandada. También acompañó cuatro finiquitos, de 3 de abril de 2020, suscritos por los Sres. Ferrada, Aedo y Benítez, pero no por el Sr. Retamal. Si bien por medio de estos documentos la Empresa pretende formar convicción en el tribunal respecto a que desvinculó a don Pedro Retamal por dicha causa legal, el día 24 de marzo de 2020, lo que fue corroborado por la testimonial de don Mauro Jara, dichos antecedentes no permiten concluir que el despido fue justificado, pues, como ya se indicó, el trabajador gozaba de fuero desde el momento de su elección como dirigente sindical, esto es, desde el 20 de marzo de 2020, situación que fue informada por el dependiente a la empresa con anterioridad a su despido, en forma verbal y escrita, optando la empresa por desvincularlo, lo que constituye una infracción a lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo, pues la separación del trabajador se realizó sin previa autorización judicial. Además, existe otro antecedente probatorio que se contrapone a la documental aportada por la compañía y que permite concluir, atendido el principio de primacía de la realidad que impera en nuestro derecho laboral, que el motivo de despido del trabajador fue otro. En efecto, en audio incorporado por la demandante sobre reunión de don Patricio Figueroa con los trabajadores, una vez efectuado el despido del Sr. Retamal, aquel reconoce que dos de las personas desvinculadas se fueron por fallas reiteradas y por negarse a trabajar, otra porque no obedecía instrucciones, mientras que el Sr. Retamal “se fue por un desfase, se tuvo que haber ido cuando tuvo problemas con la Marta, no era un trabajador estable emocionalmente, tenía problemas, incluso era violento con otros compañeros, lo que estaba definido desde octubre del año pasado”, prueba que desvirtúa la tesis de la demandada respecto a que el despido fue justificado o fundado en las necesidades de la empresa.



DÉCIMO QUINTO: En lo que respecta a los hechos y circunstancias que configuran la existencia de indicios de vulneración a la garantía sindical alegada, segundo punto de prueba de este juicio, del análisis de las probanzas rendidas, conforme a las reglas de la sana crítica, se han tenido por acreditados los siguientes hechos que, a su vez, han configurado indicios, señales o evidencias plausibles de vulneración de la libertad sindical:

1. Que el 20 de marzo de 2020, se llevó a efecto la constitución del Sindicato de marros, participando trabajadores de la Planta Carozzi Lontué, quienes concurren presencialmente a votar a la Inspección Comunal del Trabajo de Molina, lo que se acredita con el Acta de Constitución, sus respectivos Estatutos y el Certificado N° 1 de 20 de marzo de 2020, que fueron incorporados al proceso. Corroboran ello las declaraciones de Valeria Faúndez, Inspectora Comunal del Trabajo de Molina, que indicó que el Sindicato se constituyó el 20 de marzo con la concurrencia de los trabajadores a la ICT de la citada comuna.
2. Que, previo a la constitución del Sindicato N° 1, en la Planta Lontué de la denunciada, no existían sindicatos. Confirma ello la declaración de don Cristian Kolubakin, Gerente Corporativo de Personas de la Empresa, quien al absolver posiciones señaló que no existían sindicatos en dicha Planta desde 2011, lo que fue confirmado por don Mauro Jara, Gerente de Producción, quien señaló que sólo existían dos convenios colectivos. Se acreditó además que, en una fecha muy próxima a la creación del Sindicato N°1, fue formado otro sindicato en la Planta Carozzi Lontué. Lo anterior se prueba con la declaración conteste de los testigos de la demandante, por el testimonio de don Esteban Flores, que señaló que se constituyó otro sindicato en pandemia, que fue un notario al establecimiento, siendo la mayoría de sus socios trabajadores de la primera Planta y también por la testimonial de don Mauro Jara, que corroboró la existencia de dos sindicatos en la actualidad.
3. Que, el 24 de marzo de 2020, don Pedro Retamal Figueroa -en forma previa a ser despedido- puso en conocimiento de don Patricio Figueroa, Jefe del Centro de Distribución de la Planta Lontué, en forma verbal y a través de la entrega de un documento escrito, que fue leído por el Sr. Figueroa, del Sindicato que se acababa de gestar y de su calidad de presidente de éste. Lo anterior se acredita con video de fecha 24 de marzo de 2020 y con la declaración conteste de los testigos de la demandante, entre ellos el fiscalizador de la ICT, don Esteban Flores, pues reconocieron la existencia de la carta en el juicio.
4. Que la reacción del Jefe del Centro de Distribución, al tomar conocimiento por medio del Sr. Retamal de la constitución del Sindicato y de su calidad de presidente, fue la de restarle validez a dicha información y proceder de inmediato con el despido, sin realizar consultas a su jefatura, lo que se acredita con el video ya referido. Asimismo, en dicha reunión, el Sr. Figueroa profirió expresiones denigrantes y humillantes hacia el trabajador, reiterándole en diversas oportunidades que nadie lo quería y también un discurso contrario a la idea de representación de los trabajadores, lo que será analizado más adelante.
5. Al momento de ser despedido, el Sr. Pedro Retamal gozaba de fuero sindical, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 174, 221 y 243 del Código del Trabajo,



- garantía que fue vulnerada por la empresa al momento de su despido.
6. Con posterioridad al despido de don Pedro Retamal, el Sr. Patricio Figueroa convocó dos reuniones, con dos turnos distintos de trabajadores, para confirmar la existencia del Sindicato, la calidad de presidente del Sr. Retamal y para saber quiénes formaban parte de dicha agrupación. En dichas instancias los trabajadores ratificaron dicha información. Ello se acredita con los dos archivos de audio acompañados por la demandante.
 7. El 26 de marzo de 2020, don Pedro Retamal puso en conocimiento de don Patricio Figueroa el certificado N° 706/2020/14 emanado de la Dirección del Trabajo, que señalaba la legalidad de la constitución del Sindicato N° 1 y los miembros de su directiva. Lo anterior se acredita con el set de capturas de pantallas de WhatsApp ya individualizado, en que se visualiza como recibido dicho documento.
 8. El 27 de marzo de 2020, don Pedro Retamal presentó denuncia por separación ilegal ante la Inspección del Trabajo de Molina, lo que se acredita con documento extraído de la Intranet de la Dirección del Trabajo, DT Plus, exhibido por la Inspección del Trabajo.
 9. El 20 de abril de 2020, el Sindicato N° 1 interpuso denuncia administrativa por separación ilegal de funciones de dirigente sindical en contra de Empresas Carozzi S.A., lo que se acredita con la respectiva denuncia exhibida por la ICT, la que se encuentra suscrita por la directiva sindical y timbrada por la ICT de Molina.
 10. Empresas Carozzi S.A. se negó a reincorporar al Sr. Retamal durante la fiscalización efectuada por la Inspección del Trabajo el 27 de abril de 2020, pese a que los representantes de la Planta, Sres. Mauro Jara y Berta Pinto, fueron informados en dicha instancia, por el organismo fiscalizador, de que la empresa estaba incurriendo en la conducta consistente en separación ilegal de trabajador aforado, por gozar éste de dos fueros distintos, a saber, por constitución de sindicato y por ser dirigente sindical. Lo anterior se acredita con Informe de Fiscalización N° 77 y con la declaración en audiencia de juicio de don Esteban Flores, fiscalizador, que afirmó que le explicó claramente a los representantes de la Empresa, don Mauro Jara y doña Berta Pinto, que el trabajador gozaba de dos fueros, de constitución y por su calidad de dirigente sindical, y que les exhibió el documento N° 706/2020/14 emanado de la Dirección del Trabajo, testimonio que goza de presunción legal de veracidad que no fue desvirtuado por la contraria.
 11. La Empresa se negó a reincorporar al trabajador durante la mediación efectuada el 30 de abril de 2020, lo que se acredita con la respectiva “Acta de mediación final”.
 12. La investigación efectuada por la ICT de Molina, con motivo de la denuncia realizada por el Sr. Retamal, concluye la existencia de vulneración de la libertad sindical, lo que se acredita con Informe de Fiscalización N° 77, que reza: “vulneración de derechos fundamentales separación ilegal de trabajador con fuero de constitución de sindicato: Se constata práctica antisindical del artículo 289 letra F del Código del Trabajo”.

DÉCIMO SEXTO: Todos los hechos referidos anteriormente, dejan en evidencia por su número, concordancia, plausibilidad, contundencia y coherencia, que se ha cumplido con el estándar probatorio de indicios exigidos por el legislador.



DÉCIMO SÉPTIMO: Valorada la prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 493 del Código del Trabajo, aplicable por remisión que efectúa el artículo 292 del mismo cuerpo legal, ya acreditados los indicios exigidos, corresponde al denunciado y/o demandado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad, desde que ocurrió el despido.

DÉCIMO OCTAVO: En cuanto a las medidas implementadas por Carozzi, el 24 de marzo de 2020, día en que el trabajador notifica la creación del Sindicato N° 1, su calidad de dirigente sindical y la empresa hace efectivo su despido, se constata con la prueba rendida que la primera actitud del Jefe de Planta frente a lo informado por el trabajador fue la de no dar credibilidad al relato de éste. El Sr. Figueroa le indica textualmente que el documento entregado por el Sr. Retamal “no tiene ninguna validez, porque no está la Inspección del Trabajo”. Posteriormente, se niega a firmar la misiva proporcionada por el trabajador, usando los siguientes términos: “No tengo idea, no acuso recibo”, como tampoco permite que pueda exhibirle la carta a dos testigos que concurrieron a su oficina.

Se constata que, desde un primer momento, le fueron impuestas al Sr. Retamal, exigencias que van más allá de lo que dispone la normativa laboral para acreditar la constitución del Sindicato, en específico, un documento válido suscrito por la Inspección del Trabajo. Como ya se indicó anteriormente, nuestra legislación laboral, para notificar la constitución de un sindicato o el fuero de dirigente sindical de alguno de sus miembros, no contempla el requisito de presentar al empleador un documento firmado o timbrado por la Inspección del Trabajo para demostrar ello.

A partir de las declaraciones de don Mauro Jara y don Cristián Kolubakin pudo constatar, además, que la decisión del Jefe de Planta adoptada el 24 de marzo de 2020, fundada en la procedencia del despido por causa legal y ante la ausencia de un documento válido u oficial respecto del Sindicato, fue respaldada por la Empresa, pues el primero refirió en reiteradas oportunidades que “formalmente no tomó conocimiento de la formación del Sindicato (...) nosotros siempre requerimos un documento que formalizara que había una constitución del Sindicato”; mientras que, el segundo, indicó que el Sr. Figueroa sólo debería informar sobre la constitución de un sindicato “si se entera oficialmente”. Consultado directamente sobre si la Empresa ratifica el actuar de Patricio Figueroa, señaló que “Depende, (...) la compañía hasta aquí si no ha despedido a una persona es porque no ha cometido una falta suficientemente grave para desvincularlo (...) hay cosas en que estamos de acuerdo y otras que no (...)” y en relación al Sindicato N° 1, señaló no estar en desacuerdo con ninguna acción del Sr. Figueroa en particular.

En relación al despido, ya se dijo que éste fue contrario a derecho, por cuanto no respetó el fuero del trabajador. Por otro lado, no se condice con el principio de buena fe que debe imperar en las relaciones laborales que, ante la duda de si el Sindicato se encontraba legalmente constituido o si el Sr. Retamal era efectivamente su presidente, que la demandada perseverara en despedirlo, pues razonablemente pudo haber adoptado otra medida menos lesiva que desvincularlo de manera inmediata, como esperar la documentación de respaldo que el mismo trabajador ofreció entregar al informar al Sr. Figueroa de la constitución del Sindicato, por lo que el despido resulta además desproporcionado.

Asimismo, ha quedado acreditado en el proceso que el Jefe del Centro de Distribución se dirigió al trabajador utilizando un lenguaje no compatible con lo dispuesto en el artículo 2° del Código del Trabajo, que dispone: “Las relaciones laborales deberán siempre



fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona”, pues recibió un trato denigrante y humillante al ser despedido. En concreto, se le dijo: “Yo te contraté en contra de todos, nadie te quería (...) tenía tus arranques de locuras, eres o eras un buen trabajador (...) yo no ando con cosas por atrás y tú, sí (...) esto es una comunicación informal, es una chuecura, pero es tu opción”. Lo anterior se corrobora también con el testimonio de don Fredy Gutiérrez, testigo de la demandante, que expresó: “Fue muy mala la forma como lo trató, siempre tirándolo para abajo, tratándolo de loco, nunca pensé que un jefe a un trabajador lo tratara de esa forma”. Cabe entonces citar el artículo 5º del Código del Trabajo, que dispone que “El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores...”, entre las cuales está el derecho a la dignidad y a la honra, que en el caso del Sr. Retamal fueron lesionados.

DÉCIMO NOVENO: En relación a las acciones implementadas por la empresa frente a la solicitud de reintegro del trabajador efectuada por la Inspección del Trabajo el 27 de abril de 2020 y en la mediación de 30 de abril del mismo año, a la cual no se allanó, es necesario precisar que la Inspección del Trabajo sostiene su denuncia en base al artículo 289 letra f) del Código del trabajo, esto es, la negativa de Carozzi a reincorporar a sus funciones al Sr. Retamal en su calidad de dirigente sindical aforado. En su declaración en estrados, el Inspector del Trabajo Sr. Flores afirmó que concurrió a la empresa donde lo atendió la Sra. Berta Pinto y el Gerente de Producción, con el objeto de que la compañía depusiera su conducta infraccional de separar ilegalmente al trabajador. Señaló que se les explicó claramente a ambos cuáles eran los fueros que gozaba el Sr. Retamal, “el primero por ser partícipe de la constitución del sindicato y también porque era dirigente electo del sindicato, lo que quedó plasmado en un formulario especial F-20”. Interrogado sobre si se le exhibió a la empresa algún documento, expresó que “sí, la unidad de relaciones laborales entrega un certificado que acredita la calidad de dirigente, se lo exhibimos a ambos” y que a pesar de ello Carozzi mantuvo una “actitud negacionista” y no se allanó al reintegro del trabajador. Por otra parte, el Informe de Fiscalización N° 77, acompañado por la ICT, concluye: “vulneración de derechos fundamentales: separación ilegal de trabajador con fuero de constitución de sindicato, se constata práctica antisindical del artículo 289 letra F del Código del Trabajo”. Dicho informe también consigna en el punto “Antecedentes”, que el Sr. Pedro Retamal goza de fuero sindical, de conformidad a lo establecido en los artículos 221 y 243 del Código del Trabajo, por participar en la constitución del Sindicato N° 1 de Establecimiento Centro de Distribución Empresa Carozzi Planta Lontué, además de ser electo director de dicho sindicato. Por su parte, consultada la Inspectora Comunal del Trabajo de Molina, doña Valeria Faúndez, en calidad de absolvente, sobre si al momento de solicitar la información para la fiscalización de constitución de sindicato, fue requerida la reincorporación del Sr. Retamal, indicó que los hechos específicos no los recordaba porque en esa época se encontraba con feriado legal y el acto administrativo no era de ella, sino del fiscalizador en terreno, pero señaló tener conocimiento que hubo una denuncia por separación ilegal y luego una solicitud del tribunal de reintegro. Interrogada sobre si el reintegro se solicitó por fuero de dirigente sindical o de constitución, afirmó “el dirigente tiene ambos fueros”.

Debe tenerse presente, para analizar este punto, que los hechos constatados por los inspectores del Trabajo en el ejercicio de sus funciones, gozan de una presunción legal de



veracidad para todos los efectos legales, debiendo, en consecuencia, estimarse que éstos son ciertos en tanto no se demuestre lo contrario.

VIGÉSIMO: En lo referente a la solicitud de reintegro del órgano administrativo, Carozzi alega que no fue fiscalizada por los hechos que fundamentan la denuncia de autos, lo que constituye un incumplimiento del artículo 486 del Código del Trabajo, pues la fiscalización de 27 de abril de 2020 y la instancia de mediación, versaron sobre el fuero de un trabajador que asiste a la constitución de una organización sindical y no sobre el fuero que goza un trabajador por tener la calidad de dirigente sindical, lo que lesiona su derecho a defensa y las directrices internas de la Dirección del Trabajo.

Señala que en la fiscalización de 27 de abril de 2020, y en el formulario FI-20, se indica que la existencia del fuero del Sr. Pedro Retamal es por constitución del sindicato y no por su calidad de dirigente sindical, que la Inspección del Trabajo no requirió a la Empresa respecto del reintegro del trabajador en su calidad de presidente del Sindicato, lo que impide que se configure el ilícito del artículo 289 letra f) del Código del Trabajo. Y justifica su decisión de no reincorporar al trabajador porque, “desde la fecha del despido del Sr. Retamal, el día 24 de marzo de 2020, habían concurrido más de 30 días desde que se notificó a la Empresa de la fiscalización en cuestión, así las cosas, era absolutamente inaplicable el artículo 221 inciso 3º del CT (...) De este modo, a la fecha de la mediación el fuero del Sr. Retamal se encontraba extinto”.

En referencia a este punto, la Empresa acompañó diversa prueba documental: el Manual de procedimiento de fiscalización de la Dirección del Trabajo, el que en su página 131, numeral 5º, cita el artículo 221 inciso 3º del Código del Trabajo y en sus numerales 6º y 7º, los artículos 238, 229 y 243 del mismo texto, documento que se limita a referir la normativa dispuesta en el Código del Trabajo, relativa a los diferentes fueros contemplados en nuestra legislación. Asimismo, incorporó la “Circular N° 028 que Imparte materias específicas sobre el procedimiento administrativo en caso de denuncia por vulneración de derechos fundamentales de la Dirección del Trabajo”, la que en su página 18 se refiere al procedimiento administrativo especial de tutela de la libertad sindical, el que rige ante diversas infracciones, tales como la “negativa a reincorporar a un dirigente sindical aforado, frente a requerimiento de un fiscalizador” y la “separación ilegal de trabajador con fuero sindical, incluidos los delegados sindicales”, argumentando que claramente dicho documento distingue dos infracciones distintas, siendo la empresa sólo fiscalizada por la última. También aportó el formulario titulado “Fiscalización separación ilegal de trabajador con fuero”, FI-20, respecto del Sr. Retamal, de 27 de abril de 2020, en que se aprecia que en el ítem III, entre cuatro diferentes alternativas, fue marcada por el fiscalizador don Esteban Flores, con una X, la opción “trabajador despedido con anterioridad al acto de constitución de sindicato (artículo 221, inc. 3º del Código del Trabajo)” y no el recuadro “Delegado(a) (s) sindical (es) (artículos 243 y 229 del Código del Trabajo)”, lo que la empresa reprocha pues le impidió tomar conocimiento del fuero de dirigente sindical del Sr. Retamal. Acerca de ello, el Inspector del Trabajo don Esteban Flores, indicó que “(...) el ingreso es una descripción general, no dice todo el detalle, prevalece lo que el inspector constata y deja consignado en Informe de Exposición”, añadiendo que no recordaba bien si dejó consignados ambos fueros en el documento, pero que fue claro en informar a la empresa de ellos.

Interrogado don Cristián Kolubakin sobre si es contrario a las políticas de la Empresa no reintegrar a un dirigente sindical que ya ha informado tal calidad, señaló que “si



tenemos toda la información confirmada y oficial, sí”, explicando que, en su concepto, oficial equivale a legalizada y en respuesta a la pregunta por qué la empresa se negó a reincorporar a don Pedro Retamal cuando fue la Inspección del Trabajo y les informó la calidad de presidente del Sindicato, indicó que se negaron a la reincorporación porque “llegó con una instrucción por fuero de constitución”, que estaba fuera de plazo y que la segunda vez sí aceptaron la reincorporación porque venía la notificación que era dirigente sindical.

VIGÉSIMO PRIMERO: En relación a las pruebas analizadas, puede concluirse que no existe un error en la opción marcada por el fiscalizador en el Formulario F-20, porque el Sr. Retamal, al ser desvinculado, efectivamente contaba con dos fueros, el de constitución de sindicato y el de dirigente sindical, por lo que sí procedía marcar dicha opción. Ahora, si bien en el Formulario FI-20 no se encuentra también marcada la opción que hace referencia al fuero de dirigente sindical, si se mira la totalidad del documento, en él también se señala que para la acreditación del fuero laboral se tuvo a la vista el “certificado de vigencia N° 706/2020/14”, que da cuenta no sólo de la constitución del sindicato, sino también de que Sr. Retamal fue elegido presidente de la agrupación, lo que acreditaba su fuero sindical, situación que el fiscalizador puso en conocimiento del empleador el 27 de abril de 2020, según consta en sus declaraciones.

Por otro lado, se tiene presente que en la denuncia formulada por el trabajador ante la Inspección del Trabajo, éste acredita su calidad de presidente, siendo evidente que contaba con fuero en calidad de dirigente sindical. El hecho que el formulario F-20 indicado no señalare expresamente ambos fueros, en virtud del principio de primacía de la realidad, no permite arribar a la conclusión que la empresa desconocía ello, pues, como se ha señalado ya reiteradamente, existen otros antecedentes probatorios que permiten arribar a la convicción de que Carozzi fue informada por el propio Sr. Retamal, y luego por otros dependientes, de que se había constituido un sindicato presidido por dicho trabajador, lo que implicaba que gozaba por ello de ambos fueros, desde el momento en que se celebró la asamblea de constitución del Sindicato.

Respecto a la negativa de reintegro del trabajador en la mediación de 30 de abril de 2020, se revisó “Acta de mediación final”, la cual consigna que se lleva a efecto mediación originada en la ICT de Molina en fiscalización N° 0706.2020.77, de 27 de abril de 2020, por “Separación ilegal de trabajador con fuero de constitución de sindicato” y que la mediadora llama a las partes a arribar a un acuerdo que permita el restablecimiento íntegro del derecho afectado, lo cual no se produce. Si bien Carozzi alega que en esta instancia tampoco fue informada sobre el fuero de dirigente sindical del Sr. Retamal, lo que coincide con lo señalado en estrados por el Sr. Jara, dicha tesis no se conforma con el Informe que da origen a la mediación, que expresamente refiere en el punto “Antecedentes” que el 27 de marzo de 2020 ingresa denuncia por separación ilegal del trabajador y director sindical, Sr. Pedro Retamal, quien goza de fuero sindical, de conformidad al establecido en los artículos 221 y 243 del Código del Trabajo, por participar en la constitución del Sindicato N° 1 de Establecimiento Centro de Distribución Empresa Carozzi Planta Lontué, además de ser electo director de dicho sindicato”. Y además en las conclusiones se constata la práctica antisindical del artículo 289 letra f) del Código del Trabajo, por lo que se deduce claramente que el reintegro fue requerido respecto de ambos fueros.



En lo atinente al argumento esgrimido por Empresas Carozzi S.A. respecto a que, cuando fue pedido el reintegro del trabajador por el ente administrativo, no se accedió a ello porque el plazo de su fuero de constitución había expirado, cabe señalar que presumiblemente la fecha de solicitud de reintegro no dependió del trabajador, sino de la disponibilidad del ente administrativo para realizar la diligencia, no siendo procedente imputarle dicho retraso al Sr. Retamal, puesto que consta que éste efectuó la correspondiente denuncia sobre separación ilegal de trabajador aforado a pocos días de ocurrido su despido. Acoger la interpretación de la Empresa llevaría a determinar que el trabajador se encuentra desprotegido ante posibles dilaciones administrativas, y al tratarse de una denuncia asociada a la vulneración a un derecho fundamental, como es la libertad sindical, el juez debe realizar una exégesis que se incline hacia la protección o tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Cabe concluir entonces que la demandada, frente a los requerimientos de reintegro del trabajador Sr. Pedro Retamal, efectuados por la Inspección del Trabajo los días 27 y 30 de abril de 2020, se negó en dos oportunidades distintas a acceder a dicha solicitud, lo que configura una situación altamente cuestionable para la demandada pues no rectificó su actuar adecuándolo al fuero, conducta que, en definitiva, constituye la práctica antisindical consagrada en el artículo 289 letra f) del Código del Trabajo, por cuanto existen elementos probatorios suficientes que permiten arribar a la convicción de que, en dichas fechas, la Empresa sí tenía conocimiento claro de la constitución del Sindicato y de la calidad de dirigente sindical del trabajador aludido, por lo que resulta inverosímil la alegación respecto al desconocimiento del fuero de dirigente sindical, no lográndose tampoco desvirtuar la presunción de veracidad que favorece a los hechos constatados por la ICT.

VIGÉSIMO SEGUNDO: En lo relativo a la actitud de Carozzi ante la solicitud de reintegro del trabajador ordenada por el Juzgado de Letras de Molina mediante resolución de 8 de mayo de 2020, no hay controversia respecto a que la demandada se allana el 11 de mayo del mismo año, lo que es confirmado por el Acta de notificación de Inicio de procedimiento FI-1, Acta de constatación de infracciones y compromiso de corrección FI-3 y Fiscalización Separación Ilegal de trabajador con fuero, de 11 de mayo de 2020. Que en cuanto a lo solicitud relativa al pago de las remuneraciones y demás prestaciones derivadas de la relación laboral devengadas en el tiempo entre la fecha del despido y la reincorporación del trabajador Sr. Pedro Retamal, se acreditó con la documental acompañada por la demandada, consistente en liquidación de sueldo y certificado de pago de cotizaciones previsionales correspondiente a los meses de marzo y abril de 2020 y certificado de transferencia de dinero de Banco de Chile, de 13 de mayo de 2020, que sus remuneraciones y demás prestaciones, durante el tiempo que estuvo separado de sus funciones, fueron pagadas por la Empresa.

VIGÉSIMO TERCERO: En cuanto al tercer hecho a probar, **efectividad de que el actuar de la empresa ocasionó perjuicios al sindicato. En la afirmativa, naturaleza y montos.** La denunciante reprocha que la conducta de la demandada privó de representatividad al sindicato y que éste funcionara con normalidad. La demandante plantea que se pretendió inhibir la actividad del Sindicato, que el mensaje que la empresa dio a sus trabajadores es que se abstengan de sindicalizarse, de formar organizaciones sindicales y/o de participar activamente como dirigente sindicales, pues con ello se verán afectadas sus condiciones laborales, su estabilidad laboral y la correcta ejecución de sus



labores. Asimismo, alega que la Empresa promovió la deslegitimación de la representación sindical, la desincentivación para formar parte del Sindicato y de su directiva, la afectación de la imagen y credibilidad de los dirigentes sindicales y se desestimuló al Sindicato demandante, estimulando de paso la formación de otro sindicato en la misma línea de la Empresa.

Con la prueba rendida, específicamente con video de 24 de marzo de 2020, ha quedado acreditado que en el desarrollo de la reunión entre el Sr. Figueroa y el Sr. Retamal, aquel refirió expresiones contrarias a la necesidad de agrupación colectiva en el ámbito del trabajo y a la dimensión de libertad de representación de los trabajadores que emana de la libertad sindical. En concreto, dijo: “(...) Aquí hay personas buenas, si tú llegaste a revolver el gallinero, malo está, pero yo creo que aquí todo el mundo quiere trabajar y trabajar bien, y nadie está mal, en el sentido que a nadie se le trata mal, no están en malas condiciones, tienen los sueldos y regalías adecuadas, se les da todo lo que necesitan, se les aporta, se les da un break, tienen casino, tienen un montón de cosas, por tanto yo no creo que necesiten que alguien venga a decirles qué más quieren tener porque tienen de todo”. Un discurso del mismo tenor quedó acreditado con las pruebas consistentes en los dos “audios de reunión efectuados en la empresa”, en que el Sr. Figueroa se dirige a los trabajadores de dos turnos distintos, con posterioridad al despido del Sr. Retamal, con la finalidad de confirmar si es efectiva la conformación del Sindicato N° 1 y saber quiénes forman parte de él. En un primer video (duración 33:07 minutos) comenta su sorpresa ante lo ocurrido y usa las siguientes expresiones que se traen a colación a modo ilustrativo: “Aquí hay un convenio colectivo, no sé qué demandas adicionales pueden estar tan disconformes ustedes como para buscar alternativas (...) la Planta tiene un convenio que tiene un montón de beneficios que son buenos, que se han conseguido siempre a la buena”. Otros comentarios se efectuaron en referencia al presidente del Sindicato, Sr. Pedro Retamal: “Y lo que más me llamó la atención, y perdón que sea tan sincero, es que la persona que se eligió para representarlos hasta donde yo sabía no lo pasaba nadie, incluso tenía problemas psicológicos, varios querían pegarle (...)”, expresiones que claramente afectan y deslegitiman su figura. También se refirió a la nueva forma de comunicación que se produciría, a su juicio, entre la empresa y sus trabajadores, por haberse gestado el Sindicato: “Por parte mía o de la empresa no va a ser confrontacional, por parte de los trabajadores normalmente lo es, dependen del líder que elijan (...) hay gente que llega con mentalidad nueva, que no conoce la historia de la Planta, gente que no valora lo que se tiene”. En un segundo audio (duración 36:07 minutos) reitera su visión negativa sobre las agrupaciones sindicales: “No sé cuál es la necesidad ...¿están disconformes, están mal atendidos, están maltratados, están en condiciones pésimas, deplorables? (...) “Cuando la gente se organiza es cuando no tiene facultades para pedir cosas (...)”. Agregando: “El sindicato es súper bueno cuando trabaja en conjunto con la jefatura y con la Empresa, pero no cuando va en conflicto, los conflictos dependen de las personas que están dirigiendo el Sindicato” (...) “Hay sindicatos que son para bien y otros para destruir”, es decir, plantea una visión del todo antagónica entre el Sindicato y la Empresa, cuando aquel se configura al margen de los intereses corporativos.

Asimismo, en ambas reuniones el Jefe de Planta les advierte a los trabajadores los perjuicios asociados a la creación del Sindicato, a saber: “Con la formación del Sindicato van a tener que empezar a negociar de cero porque el convenio colectivo desaparece.



Todos los beneficios que hay hoy en día con el convenio al formar un sindicato desaparecen, se empieza de cero, no van a tener ni bonos (...)", lo que ciertamente constituye información errada y puede ser considerada una expresión antisindical manifiesta, pues está destinada a desmotivar o desestimular la participación colectiva de los empleados en el Sindicato, ante el riesgo de pérdida de dichos beneficios.

Por otro lado, el Sr. Figueroa les señala en reiteradas oportunidades a los trabajadores que no está en desacuerdo con la formación de sindicatos, pero sí con la forma "a escondidas" en que éste se creó, lo que considera una deslealtad. Agrega que la situación perjudica enormemente su gestión como jefe. En relación a ello, los referidos audios dan cuenta que el Sr. Figueroa les preguntó directamente a los trabajadores presentes en la convocatoria quiénes integraban el nuevo Sindicato, lo que respondieron sólo algunos, situación que es conteste con lo indicado por el testigo de la demandante, Sr. Ovando, en el juicio, respecto a que él sí reconoció que formaba parte de la agrupación, mientras que otros trabajadores no lo hicieron por miedo a que los despidieran o que la Empresa empezara un seguimiento en su contra, temor que es coherente con el contexto en que fueron abordados los dependientes para hablar del tema -posterior al despido del presidente del Sindicato- y el contenido manifiestamente antisindical del discurso en que se realizaron las referidas reuniones y que podría explicar también por qué el Sindicato no entregó oficialmente a la Empresa la nómina de sus socios, cuestión que es alegada por la demandada en su contestación para sustentar el desconocimiento de la conformación del Sindicato N° 1.

Si bien las expresiones recién citadas emanan de Jefe del Centro de Distribución de la Planta Carozzi Lontué, quien no necesariamente cuenta con facultades generales de administración al tenor del artículo 4° del Código del Trabajo, resulta particularmente decidor, para ilustrar que dicho discurso fue respaldado por la Empresa y por ende también la decisión del despido del Sr. Retamal, el hecho que el Gerente Corporativo de Personas, don Cristián Kolubakin, afirmara en el juicio no estar en desacuerdo con ninguna de las actitudes del Jefe del Centro de Distribución en relación al Sindicato N° 1 y la actitud permanente de Carozzi de no aceptar la realidad de la constitución del Sindicato, hasta no contar con un documento válido u oficial.

Dichas ideas o expresiones demuestran un discurso de menosprecio a la actividad sindical, contrario a la posibilidad de que los trabajadores se auto organicen y sean representados por quienes ellos libremente decidan para la consecución de fines lícitos, como es el mejoramiento de sus beneficios económicos, sociales y todos aquellos contenidos en el artículo 220 del Código del Trabajo.

Asimismo, también dañan o deslegitiman la imagen y capacidades del reciente presidente electo. Por otro lado, el hecho que el Sr. Figueroa preguntara a los trabajadores quiénes formaban parte de la agrupación, previo a señalar que la situación la consideraba una deslealtad y le generaba perjuicios a él en su calidad de jefe, constituye claramente una forma de presión indebida hacia los trabajadores que pugna con el principio de autonomía con que deben gozar las organizaciones sindicales. En este sentido, al ser interrogado el Sr. Kolubakin si está dentro de las políticas de la empresa que una jefatura interroga a los trabajadores para saber quiénes forman parte de un sindicato, respondió "yo puedo ir y preguntarle a un presidente de un sindicato cuántos socios tiene". Y en referencia a un trabajador que no es presidente, señaló: "sí, puedo



preguntarle. Otra cosa es el carácter con que le pregunte. No está dentro de las políticas de la empresa, no está escrito, no dice qué le puedo o no preguntar a los trabajadores”.

En relación a ello, se debe recordar que la existencia de un derecho constitucional que garantiza la libertad de asociación en el ámbito de la empresa, exige de terceros, incluidos el empleador, un deber de abstención en los procesos de constitución, desarrollo y negociación, por lo que no le cabe a ninguno de los representantes empresariales intervención alguna, como lo es preguntar quiénes están o no afiliados a un sindicato.

Se acompañaron además otros antecedentes probatorios que dan cuenta de los perjuicios sufridos por integrantes del Sindicato, como por ejemplo, la constancia dejada por doña Margaret Botello ante la Inspección del Trabajo, de fecha 6 de abril de 2020, en que señala que desde que se creó el Sindicato hubo un cambio de actitud por parte de su jefatura hacia ella, pues ahora la vigilan y le dicen que no converse con sus compañeras, lo que le impide desarrollar normalmente su trabajo. Si bien la Sra. Botello no declaró en el juicio, ni tampoco la jefatura de la Planta directamente aludida en la constancia, lo expresado en dicho documento es coherente con lo indicado por los restantes testigos de la demandante, que refirieron en el juicio que sintieron temor y aislamiento por parte de la Empresa, luego del despido del Sr. Retamal. También se incorporó al proceso un video de fecha 26 de marzo de 2020, grabado por el trabajador Christoffer Obando, en el cual acusa la exclusión de los trabajadores sindicalizados (entre ellos él y otros colegas que se ven en la grabación) de una reunión efectuada por la Empresa. Este video es concordante con lo declarado por el testigo en estrados y don Marco Reyes, quien interrogado sobre el ambiente en la Planta, luego del despido del Sr. Retamal, refirió que las personas del Sindicato N° 1 fueron aisladas y presionadas.

De los antecedentes probatorios analizados, se concluye que la organización sindical recién creada, a los pocos días de existir, quedó desprovista de su presidente y no cabe duda que esta figura es de especial relevancia para este tipo de organizaciones, pues es elegida democráticamente por la mayoría de los socios, goza de fuero laboral y representa a todos quienes conforman la organización, al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 del Código del Trabajo en relación con el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil. Razonablemente, es posible concluir que el despido del Sr. Retamal afectó al Sindicato N° 1, por cuanto se dio a los trabajadores un potente mensaje de desprotección frente a las garantías del fuero sindical que generó en el resto de sus socios un clima de incertidumbre respecto a la continuidad del Sindicato y un temor en los trabajadores en lo relativo a su estabilidad laboral, por el hecho de ser parte de la nueva organización, lo que fue declarado en forma conteste por los testigos de la demandante. En este sentido, algunos testimonios ilustrativos de ello fueron los del Sr. Gutiérrez, que señaló que el Sr. Retamal “estuvo más de un mes afuera, se echó de menos, era el cabecilla de todo”. En tanto, El Sr. Reyes, depuso: Si nos sacaron al presidente, qué queda para los demás, todos con miedo, aislados”. Por su parte, el Sr. Obando dijo que tuvo que ser la voz del Sindicato mientras Pedro Retamal estuvo afuera para que el proyecto no se derrumbara, porque habían trabajado mucho en él.

VIGÉSIMO CUARTO: La Empresa aduce en su contestación que ha mantenido comunicación con la Organización Sindical, tendiente a satisfacer sus pretensiones, señalando que desde la reincorporación del Sr. Retamal se han entregado permisos sindicales conforme lo dispone la ley y las facilidades de reunión que han solicitado. Argumenta que si se hubiese querido desestimular al Sindicato, simplemente no hubiese



accedido a dichas peticiones. Para ello, acompañó cadenas y correos electrónicos sobre permisos solicitados por el Sindicato N° 1. El primero de ellos da cuenta que el 11 de mayo de 2020 el Sr. Retamal pide permiso en base al artículo 249 del Código del Trabajo, el cual al día siguiente es negado por la empresa por encontrarse pendiente el resultado de la fiscalización remota iniciada el 2 de abril por parte de la Inspección del Trabajo de Molina. El mismo día, luego de recibir contestación del ente administrativo, en la cual se insta al empleador a cumplir con la normativa laboral vigente relativa a los permisos sindicales, la empresa accede a otorgarlos. En correo número dos, enviado el 12 de mayo por don Pedro Retamal a Berta Pinto, éste le informa que se desarrollará la primera asamblea oficial del sindicato, pero no se acompañó respuesta a dicho mensaje. El email número tres, enviado por don Pedro Retamal a Berta Pinto, se refiere a otra solicitud de un permiso sindical, pero no se acompañó la respectiva respuesta. Las cadenas de correos números cuatro y cinco hacen referencia a conversaciones entre el Sr. Retamal y Berta Pinto, relativas a la petición del Sindicato para usar la sala de reuniones. La Empresa les sugiere otra opción para reunirse, pues dicho lugar está reservado para otras actividades, y posteriormente el Sindicato indica que no puede efectuar la reunión por reposo médico de su presidente.

Esta seguidilla de correos da cuenta de comunicaciones mantenidas entre la Empresa y el Sindicato con posterioridad al reintegro del Sr. Retamal ordenado por el tribunal y no del tiempo en que se mantuvo alejado de la compañía. El primer correo aportado demuestra que, incluso ya reintegrado el Sr. Retamal a sus labores, situación que ocurrió el 11 de mayo de 2020, el empleador persistió en su actitud de mantener en entredicho la existencia de la agrupación y de exigir confirmación de la Inspección del Trabajo como requisito para otorgar el permiso sindical pedido. Los restantes correos electrónicos, algunos sin respuesta, resultan insuficientes para acreditar lo sostenido por la Empresa respecto a que se han dado facilidades para que el Sindicato N° 1 se reúna, pues esta versión contrasta con lo señalado por los testigos de la demandante, que señalaron que la compañía no les ha dado los permisos necesarios para reunirse, lo que es coherente con la actitud que había mantenido la empresa hasta el momento, de negar la existencia del Sindicato. Por su parte, la demandante aportó cadena de correos electrónicos de fecha 3 de abril de 2020 con solicitud de permiso para doña Margaret Botello, en que la Empresa niega el permiso pues “no se han cumplido las formalidades que dispone la legislación laboral”.

VIGÉSIMO QUINTO: En relación a que la Empresa habría estimulado la formación de un segundo sindicato con la finalidad de afectar al Sindicato N° 1, se tiene por acreditado con la prueba testimonial rendida que efectivamente se formó un segundo sindicato en la Planta Lontué, en forma muy próxima a la creación del Sindicato N° 1, sólo algunos días después. En su contestación, Empresas Carozzi S.A. se refiere brevemente a esta afirmación, calificándola de “irresponsable” por cuanto aquello es subestimar el poder que tienen los demás trabajadores en la Planta. Al respecto, consultado el Sr. Kolubakin sobre si la Empresa interviene o no en la formación de sindicatos, señaló que “La compañía tiene una política de sindicatos de más de 50 años donde jamás vamos a intervenir en las cosas que la ley no nos permite hacerlo (...) sólo facilitamos cuando alguien nos pide colaboración”. Y ante la interrogante de si sería contrario a la política de la Empresa que una jefatura estimulara o desestimulara la formación de sindicatos, respondió: sí, sería contrario. Estas declaraciones contrastan con video incorporado por la



demandante, de 26 de marzo de 2020, denominado “video que graba reunión efectuada por la empresa, en la cual informa a los trabajadores que los autorizan a formar un sindicato, distinto al ya constituido”. En éste se aprecia que el trabajador que lidera la convocatoria, cuya identidad no se conoce, explica que “por un asunto que se produjo en el CD (Centro de Distribución), nosotros hace tiempo estamos pidiendo la autorización para hacer un sindicato y hoy día nos dieron la autorización para hacerlo”. Agrega que “la idea es formar un solo sindicato (...) El convenio vigente por el hecho de haber un sindicato formado allá en el CD, quedaría obsoleto, prácticamente nos tenemos que ver en le obligación de formar uno”. Luego, en “video que graba una reunión efectuada por los trabajadores, en la cual se trata el tema de la formación de un sindicato, distinto al ya constituido”, se señala por el dependiente que se dirige a los asistentes que “Legalmente ya no hay nada que hacer, ya está formado el Sindicato (el N° 1) (...) La empresa está dando facilidad para hacer otro sindicato, negociar a la buena ya no podemos porque ya hay un sindicato constituido”.

Por su parte, los testigos de la demandante declararon que en la empresa existen dos sindicatos. El Sr. Obando se refirió “al N° 1 y el otro “de la Empresa”. Dijo que el otro sindicato se formó al día siguiente y que el empleador le habría dado apoyo, prestándole espacios para poder juntarse y hacer reuniones, a diferencia del Sindicato formado por el Sr. Retamal. El testigo Marco Reyes indicó que al segundo sindicato se le dieron los permisos para que se reunieran con todo el favor de la empresa, mientras que al Sindicato N° 1, no.

De las grabaciones recién referidas se desprende que se realizaron unos pocos días después de producido el despido de don Pedro Retamal, porque se hace referencia a su figura y a la reciente creación del Sindicato N° 1. Se evidencia que la Empresa estimuló la creación de un segundo Sindicato, cuestión que pugna con una de las características esenciales de las organizaciones sindicales, cual es que éstas deben gozar de capacidad de auto organización y autonomía, sin intervención de terceros. Apoya la conclusión anterior el contexto sindical previo de la Planta Carozzi Lontué, en que no existía sindicato alguno desde 2011, por lo que llama la atención que, ante el surgimiento del Sindicato N° 1, se creara en forma tan rápida otro colectivo de trabajadores, respecto del cual uno de sus representantes señala sin problemas, a viva voz, en dependencias de la empresa y frente a un amplio número de colaboradores, haber recibido autorización y facilidades de la Empresa para hacerlo, situación que da luces respecto a que la configuración de esta agrupación surgió en respuesta o directamente motivada por la creación del Sindicato N° 1 y no de forma libre o independiente por los trabajadores. El contexto en que se realizaron dichas reuniones, además, contrasta absolutamente con el modo en que surgió el Sindicato N° 1, pues los testigos de la demandante fueron claros en señalar que les costó mucho trabajo la gestación del Sindicato y que las reuniones para conformar la agrupación se hicieron en forma secreta o a escondidas, lo que explica también el desconcierto del Sr. Figueroa -y de la Empresa- al enterarse de la formación del Sindicato el 24 de marzo de 2020. Presumible y razonablemente entonces, la creación de este segundo Sindicato se realizó con la finalidad de debilitar o generar un contrapeso al Sindicato N° 1, en respuesta a los intereses de la Empresa más que a las necesidades espontáneas de otros trabajadores.

Todos los hechos referidos en el tercer punto de prueba, relativos a los perjuicios al Sindicato, acreditan que la empresa afectó gravemente el derecho a la libertad sindical.



VIGÉSIMO SEXTO: En relación a la existencia de elementos indiciarios previos del clima antisindical de Empresas Carozzi S.A., planteado por la demandante en base a que la compañía habría sido condenada previamente por prácticas antisindicales mediante sentencia firme dictada en causa rol S-3-2018, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó y para lo cual también acompañó publicación del medio Prensaruil, de 25 de abril de 2020, el tribunal tuvo a la vista dichos antecedentes advirtiendo que, si bien se constata por el juez a quo la existencia de discriminación y la práctica antisindical de uso abusivo de la facultad del ius variandi en contra de dirigentes sindicales de la Planta de Carozzi ubicada en Teno, lo que constituye una vulneración a la libertad sindical, dicho antecedente judicial, por ser único y basarse en hechos distintos al de este juicio, no permite concluir a esta juzgadora que la demandada sea reincidente, o que el ejercicio de prácticas antisindicales sea la regla general en toda la compañía a nivel nacional o que existiera una política corporativa previa y clara de la Empresa en el sentido de lesionar la libertad sindical, con anterioridad a la denuncia que dio origen a este proceso, por cuanto los hechos probados en este juicio y que resultan vulneratorios de la libertad sindical dicen relación con conductas propias de la jefatura local de la Planta Carozzi Lontué, que se iniciaron con el despido del Sr. Retamal y que fueron conocidas y respaldadas por altos cargos de la compañía. Si bien en la prueba testimonial de la demandante se aportaron antecedentes tales como el testimonio del Sr. Obando, que señaló que “siempre supimos como trabajadores que si formabas un sindicato ibas a ser despedido, la empresa siempre se negó a la formación de sindicatos”, y se refirieron algunos despidos de trabajadores que habrían ocurrido por intentar formar agrupaciones sindicales, antes de la formación del Sindicato N° 1, dichos antecedentes no fueron precisos, sino más bien vagos o generales y no se respaldaron con prueba documental alguna, de modo que no lograron formar convicción en el tribunal respecto a que en Empresas Carozzi S.A. existía un claro contexto antisindicalista en forma previa al despido del Sr. Pedro Retamal.

Por otro lado, si bien Carozzi inicia su contestación dando cuenta de su positivo contexto sindical, referido a la alta tasa de sindicalización, que supera la media nacional y los acuerdos arribados en las negociaciones colectivas, dicha realidad nacional no necesariamente responde al contexto sindical que se logró ilustrar de la Planta Carozzi Lontué, en que desde 2011 no existían sindicatos.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en este juicio se ha denunciado la vulneración a la libertad sindical, garantía que goza de especial relevancia en nuestro ordenamiento jurídico, pues “(...) es un derecho fundamental derivado de la libertad de asociación, y por ende de carácter civil y político. Pero además el sindicalismo cumple varias funciones primordiales en las democracias contemporáneas. Por un lado mejora las condiciones de remuneración y de trabajo de los trabajadores en general (función económica y de bienestar), por otro representa un contrapoder a la potestad de mando del empleador en la empresa (función representativa y de gobernanza) y por otro otorga voz a los trabajadores en general dentro del juego democrático (función política y de paz social). Por todo esto, una práctica antisindical afecta el interés público y no se trata de un mero lío entre particulares”¹. Dicha garantía suele entrar en conflicto con el derecho de la empresa a organizar y administrar sus medios, como ocurre en el caso de marras,

¹ Gamonal, Sergio (2017). Daños punitivos y prácticas antisindicales. En Revista de Derecho Universidad Católica del Norte. Año 24 N° 1.



concluyéndose que la demandada no logró justificar la razonabilidad ni la proporcionalidad del despido del Sr. Retamal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 493 del Código del Trabajo, vulnerando así lo dispuesto en los artículos 174, 221, 243 y por cierto el artículo 5° del mismo texto, que limita las potestades del empleador en los márgenes del goce de los derechos fundamentales de los trabajadores y también las normas de nuestra Constitución Política de la República, que garantizan la libertad sindical, lesionando el derecho en su esencia. Por otro lado, la actitud persistente de la empresa de negar y mantener en duda la existencia del Sindicato N° 1, fundada en la ausencia de una confirmación oficial de su validez y que implicó que se negara en dos oportunidades al reintegro del trabajador, habiendo sido requerido por la ICT, sumado a otras conductas y expresiones manifiestamente antisindicales que tuvieron lugar en el establecimiento con ocasión y con posterioridad al despido del trabajador, entre ellas, un discurso de un claro tenor antisindical por parte del Jefe del Centro de Distribución, respaldado por la Empresa, presiones indebidas a los trabajadores para conocer quiénes formaban parte del sindicato y un trato diferente hacia los socios del Sindicato N° 1 que implicó aislarlos de participar en reuniones de la empresa por el hecho de ser parte de este colectivo, permiten concluir razonablemente que hay también lesión a lo dispuesto en los convenios 87, 98 y en especial al Convenio N° 135 de la Organización Internacional del Trabajo que cautela la libertad de representación de quienes conducen la organización y que consigna que “Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos (...)”, afectando la demandada la libertad sindical en su esencia, por lo que se acogerá la denuncia y demanda deducidas.

VIGÉSIMO OCTAVO: Toda la prueba incorporada al proceso ha sido valorada conforme a las reglas de la sana crítica, incluso aquella que no ha sido nombrada en forma expresa en la sentencia, la cual no contradice o confirma las conclusiones asentadas.

VIGÉSIMO NOVENO: En cuanto a la naturaleza y monto de los perjuicios reclamados, la demandante ha pedido se condene a la demandada al pago de \$100.000.000.- por concepto de tutela reparatoria. El artículo 292 del Código del Trabajo dispone que las prácticas antisindicales serán sancionadas con las multas que se indican y que el conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o antisindicales se sustanciará conforme a las normas establecidas en el Procedimiento de Tutela Laboral, en el cual se contempla el artículo 495 N° 3, que establece que el juez puede decretar “las indemnizaciones que procedan”, entregándose al juzgador amplias facultades para determinar aquellas, conforme al principio de reparación integral del daño que impera en nuestra legislación. Asimismo, no debe olvidarse que el número 4° de la misma regla dispone que “en cualquier caso, el juez deberá velar para que la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada y se abstendrá de autorizar cualquier tipo de acuerdo que mantenga indemne la conducta lesiva de derechos fundamentales”. Así, queda claro que la intención del nuestro legislador es reestablecer el equilibrio perdido ante la vulneración de derechos fundamentales, otorgándole al juez amplias facultades para alcanzarlo, siendo procedente hacerlo a través de una suma de dinero a título de indemnización de perjuicios por daño moral. Cabe precisar, al respecto, que no es un impedimento que el Sindicato demandante sea una persona jurídica para sustentar la procedencia de la indemnización por daño moral, el cual en este caso, más que sustentarse en una afectación a la



integridad física, psíquica o al honor, definición que expresa la demandada en su contestación, se fundamenta en la puesta en peligro de la subsistencia del Sindicato recientemente creado, a través de acciones que propendieron a su desarticulación, debilitamiento y falta de reconocimiento expreso por parte de la Empresa y de la vulneración de la posibilidad concreta, protegida constitucionalmente e internacionalmente por el ordenamiento jurídico vigente, de que los trabajadores puedan organizarse autónomamente y ser escuchados al interior de la Empresa.

Por estas consideraciones y, visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 19 y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República, artículos 1, 2, 4, 5, 174, 221, 224, 234, 243, 289 y siguientes, 446 y siguientes, 453 y siguientes, 485 y siguientes, todos del Código del Trabajo, y demás normas citadas, SE DECLARA:

I.- Que SE ACOGE la denuncia interpuesta por la Inspección Comunal del Trabajo de Molina y la demanda deducida por el Sindicato N° 1 Establecimiento Centro de Distribución Empresa Carozzi Planta Lontué, en contra de Empresas Carozzi S.A. y en consecuencia, se declara:

1.- Que la demandada incurrió en la práctica antisindical del artículo 289 letra f) del Código del Trabajo y en otros actos (precisados a partir del considerando vigésimo tercero) que afectaron gravemente la garantía fundamental de la libertad sindical del Sindicato N° 1 Establecimiento Centro de Distribución Empresa Carozzi Planta Lontué.

2.- Que, en lo sucesivo, Empresas Carozzi S.A. deberá abstenerse de realizar conductas de la misma naturaleza o similar a las constatadas, que resulten vulneratorias de la libertad sindical e implementar las siguientes medidas dirigidas a reparar las consecuencias derivadas de la vulneración de dicho derecho, todo bajo apercibimiento del artículo 492 inciso primero del Código del Trabajo, en concreto:

2.1.- Pedir disculpas públicas al Sindicato N° 1 Establecimiento Centro de Distribución Empresa Carozzi Planta Lontué, reconociendo que lesionó la garantía de la libertad sindical del Sindicato, mediante una reunión con la directiva sindical, una publicación en la página web de EMPRESAS CAROZZI S.A., en un lugar visible de dicho sitio, por 30 días y por correo electrónico enviado a la directiva del Sindicato.

2.2.- Que la empresa efectúe tres charlas informativas a realizarse en los días y meses a convenir con la Organización Sindical, con el objeto de informar a los trabajadores de la Planta Carozzi Lontué, incluyéndose a las jefaturas de dicho establecimiento, los derechos fundamentales que les asisten a los trabajadores, en especial la libertad sindical, las que deberán realizarse por académicos o profesores especialistas en derecho laboral del país y que podrán efectuarse por videoconferencia atendida la contingencia sanitaria originada por el virus Covid-19.

3.- Que se condena a la denunciada a pagar una multa de 150 UTM, de conformidad al artículo 292 del Código del Trabajo, sanción que se fundamenta en la conducta persistente de la Empresa de no reconocer la existencia del Sindicato demandante y la calidad de dirigente sindical de su presidente, Sr. Pedro Retamal Figueroa, que llevó a la denunciada a negarse en dos oportunidades al reintegro del trabajador, pese a la solicitud y opinión contraria del organismo técnico establecido para la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral.



4.- Que se condena a la demandada Empresas Carozzi S.A. a pagar al Sindicato N° 1 Establecimiento Centro de Distribución Empresa Carozzi Planta Lontué, a título de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de \$30.000.000 (treinta millones de pesos), la que deberá actualizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo. Esta suma no es propiedad de los socios individualmente considerados y deberá estar destinada al cumplimiento de los fines sindicales, entre los cuales se contemplan actividades de capacitación, culturales, recreacionales o las que la autonomía del propio Sindicato estime necesarias y prioritarias.

5.- En cuanto a la solicitud de reintegro del Sr. Pedro Retamal Figueroa, la cual se hizo efectiva el 11 de mayo de 2020, se declara el reintegro definitivo del trabajador a sus labores en la empresa y se rechaza lo pedido por el Sindicato demandante respecto al pago de las remuneraciones y otras prestaciones del trabajador individualizado, de acuerdo a lo razonado en considerando vigésimo segundo del fallo.

II.- Remítase copia de la presente sentencia a la Dirección del Trabajo, una vez que esté firme.

III.- Que cada parte pague sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

RIT S-1-2020.-

RUC 20-4-0269024-1

Dictada por doña **Macarena Paz Romero Olivares**, Juez Interina del Juzgado de Letras de Molina, con competencia en materia laboral.

En Molina, a veinte de abril de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución precedente.



A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>